

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL GOLPE DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Contribución al estudio del contexto histórico



Luis Corvalán Marquéz

Índice

Introducción

Capítulo I

Desde el 4 de noviembre al 4 de febrero 1979

Anexo al Capítulo I

Del nombre del Estado de México
en la historia de México
y el de la actual federación

A la memoria de mi padre
don Luis Corvalán Izquierdo,
y de mi sobrino,
Pablo Huapaya Corvalán

Capítulo II

Desde el 4 de febrero al 4 de marzo 1979
a continuación del Capítulo I

I. Primera fase

Desde el 4 de febrero al 4 de marzo 1979
Peculiaridades de la fase

II. Segunda fase

Desde el 4 de marzo al 4 de abril 1979
Peculiaridades de la fase

Capítulo III

Desde el 4 de abril al 4 de mayo 1979
Peculiaridades de la fase

I. Primera fase

Desde el 4 de mayo al 4 de junio 1979
Peculiaridades de la fase

II. Segunda fase

Desde el 4 de junio al 4 de julio 1979
Peculiaridades de la fase

III. Tercera fase

Desde mediados de agosto hasta la muerte de don Luis Corvalán

Índice

	Pág.
Introducción	9
Capítulo I	
Desde el 4 de septiembre al 4 de noviembre de 1970	19
Anexo al Capítulo I	
Del informe del Senado de los EE.UU. «Acciones encubiertas en Chile»: La intervención norteamericana entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre de 1970	42
Capítulo II	
Desde el ascenso de Salvador Allende a la primera magistratura al asesinato de Edmundo Pérez Zujovic	51
I. Primera fase:	
Desde el ascenso de Salvador Allende a la Presidencia de la República hasta las elecciones municipales de abril de 1971	51
II. Segunda fase:	
Desde las elecciones municipales de abril al asesinato de Edmundo Pérez Zujovic	75
Capítulo III	
Desde el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic hasta la marcha de las «cacerolas vacías»	97
I. Primera fase:	
Desde el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic a las elecciones complementarias por Valparaíso	97
II. Segunda fase:	
Crisis partidarias	111
III Tercera fase:	
Desde mediados de agosto hasta la marcha de las cacerolas vacías	119

Capítulo IV

Desde la marcha de las «cacerolas vacías» hasta los comienzos del paro de octubre	147
---	-----

I. Primera fase:

Desde la marcha de las «cacerolas vacías» hasta el fracaso de las conversaciones entre el gobierno y la DC	147
--	-----

II. Segunda fase:

Desde el fracaso de las conversaciones gobierno-DC hasta los comienzos del paro de octubre	188
--	-----

Capítulo V

Desde el paro de octubre hasta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973	227
---	-----

I. Primera fase:

Desde el desencadenamiento del paro de octubre hasta su solución	227
--	-----

II. Segunda fase:

Desde fines del paro de octubre hasta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973	244
--	-----

Capítulo VI

Desde las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 hasta el «Tanquetazo» del 29 de junio	287
--	-----

I. Primera fase:

Desde las elecciones parlamentarias de marzo hasta la declaración de incompetencia del Tribunal Constitucional	287
--	-----

II. Segunda fase:

Desde la autoinhabilidad del Tribunal Constitucional hasta el tanquetazo	326
--	-----

Apéndice al capítulo VI

Del informe del Senado de los EE.UU. sobre acciones encubiertas en Chile: Acciones de inteligencia de la CIA sobre las FF.AA. chilenas entre 1970 y 1973	338
--	-----

Capítulo VII

Desde el tanquetazo al golpe del 11 de septiembre 349

I. Desde el tanquetazo hasta el fracaso de las últimas conversaciones entre el gobierno y la DC 349

II. Desde el fracaso de las conversaciones entre la DC y el gobierno hasta el golpe militar 375

Consideraciones finales 413

Bibliografía 431

Capítulo VII

Desde el tanquetazo al golpe del 11 de septiembre

I

Desde el tanquetazo hasta el fracaso de las últimas conversaciones entre el gobierno y la DC

Luego del 29 de junio, a pesar de que la izquierda, mediante considerables movilizaciones de trabajadores, había procedido rápidamente a ocupar las principales industrias de Santiago y de otras ciudades importantes, se hizo evidente que la fuerza decisiva en el país eran los militares y que estos estaban lejos de permanecer insensibles ante el curso de los acontecimientos. Aún más, los ánimos que ganaban terreno al interior de los cuarteles eran precisamente aquellos que deseaban algún tipo de pronunciamiento. Sólo el claro predominio de los sectores constitucionalistas en las cúpulas impedía que los acontecimientos se precipitaran. La intentona del Regimiento Blindados Número 2, -que no podía haberse producido sino en el marco de un plan mayor- había suscitado viva simpatía al interior de no pocas unidades militares, especialmente entre la oficialidad joven.¹

La derecha percibió muy claramente esta realidad y sacó las conclusiones pertinentes, las que contenían dos aspectos principales: 1) la necesidad de acelerar el proceso de aislamiento del sector constitucionalista de las FFAA y, 2) la urgencia de agudizar las contradicciones entre los institutos armados como tales y el gobierno.

En relación a esto último, no por casualidad en su discurso pasó a ocupar un lugar creciente la temática sobre la eventual formación de grupos paramilitares por parte de la UP y el MIR, los cuales adicionalmente estarían compuestos por una cantidad considerable de extranjeros. A tales planteamientos la derecha sumó otros, relativos a la hipotética infiltración izquierdista de las FFAA, a lo que debe agregarse el tópico sobre la desintegración del país y la consiguiente amenaza que ello suponía respecto de la seguridad nacional.² Todas estas, por cierto, eran cuestiones frente a las cuales los uniformados no podían dejar de ser altamente sensibles.

En la izquierda y en la DC también se captaba el rol decisivo que inevitablemente habían alcanzado los militares, y en función de ello tanto una como otra ajustaron sus respectivos diseños políticos.

1. Oposición y Gobierno luego del 29 de junio

Al día siguiente del abortado movimiento militar del 29 de junio, Salvador Allende solicitó al Congreso autorización para declarar el Estado de Sitio en todo el territorio nacional. El Presidente, al igual que el Comandante en Jefe del Ejército, esperaba en cualquier momento réplicas del frustrado alzamiento. Ese mismo día, en privado, había declarado: «tememos el levantamiento, en las próximas horas, de los regimientos de Antofagasta, Linares, Temuco, Valdivia, Osorno y Concepción, así como de la marina. La Aviación tiene la mayoría de los Hawker-Hunter en Concepción y está expectante.»³

En el marco de tales temores, en su discurso desde los balcones de La Moneda, ante una gran multitud que había salido a repudiar la intentona militar, Salvador Allende rechazó la idea de cerrar el Parlamento, como lo demandaban algunos de los sectores sociales que apoyaban a la UP. Estos, provenientes especialmente del Polo Revolucionario, consideraban que el Legislativo estaba seriamente involucrado en los recientes acontecimientos. Lejos de coincidir con esta demanda, Salvador Allende, desde los balcones del Palacio Presidencial, sostuvo que era indispensable enviar al Congreso un proyecto de ley que, al ser aprobado, debía permitir convocar a un plebiscito. A través de este mecanismo la ciudadanía tendría que dirimir el conflicto entre gobierno y oposición.⁴

La idea básica del Presidente, por tanto, una vez más consistía en reforzar la legitimidad del orden institucional. Ello suponía, a su juicio, abrir un diálogo fructífero con la DC, cuyo resultado debía consistir precisamente en un consenso sobre la necesidad de limitar el conflicto político a los marcos legales. Paralelamente Salvador Allende pensaba llamar a retiro a los que consideraba «oficiales sediciosos», fortaleciendo así al sector constitucionalista de las FFAA, cuyos mandos se integrarían al gabinete con un programa de emergencia. Junto con todo lo anterior, el mandatario pensaba en la necesidad de vigorizar las organizaciones de los trabajadores y adecuarlas a las nuevas realidades políticas, es decir, a los imperativos de contribuir a detener, junto al sector constitucionalista de las FFAA, un eventual nuevo intento de golpe.

Esta orientación política del presidente de inmediato encontró, entre los más diversos actores, obstáculos serios. Desde ya la UP, como lo vimos en el capítulo anterior, era contraria a la idea de convocar a un plebiscito. A ello agréguese el hecho de que el PS y el MAPU de Garretón se oponían a cualquier diálogo con la DC. La directiva de esta colectividad, a su vez, situada en una dura posición frente al Ejecutivo, se negaba a cualquier tratativa; mientras que en el Ejército había resistencias a participar en el gabinete.

Los sectores más radicalizados de la izquierda, como eran el MIR y el MAPU de Garretón, además de no compartir en absoluto la estrategia del Presidente, comenzaron, por su parte, a plantear la necesidad de que se entregara armas al pueblo. Tales colectividades partían del supuesto de que ello constituía la única manera de defenderse frente a un inevitable nuevo intento de golpe, en el que estaría involucrada el conjunto de la oposición, con apoyo de EEUU.

Por su parte, los partidos opositores bajaron el perfil de los sucesos del 29 de junio y, a la par, en el Congreso se negaron a conceder la declaración del Estado de Sitio solicitada por Salvador Allende. El PN sostuvo que los hechos de la sublevación configuraban «un cuadro confuso», en virtud de lo cual no era posible formarse una opinión global. Sin perjuicio de ello esta colectividad advirtió que no otorgaría «mayores facultades, por ningún concepto» al gobierno en virtud de su ilegitimidad, lo cual no lo haría merecedor ni al «más elemental grado de confianza, aún para el ejercicio de sus facultades ordinarias.»⁵

Sobre la misma cuestión, la actitud de la DC fue algo más ambigua, especialmente al comienzo. La directiva del partido durante la mañana del 29 había seguido atentamente los acontecimientos. Una vez que el desenlace se puso de manifiesto, procedió a fijar su posición. Sólo entonces Patrio Aylwin declaró que su colectividad aún «manteniendo una actitud de oposición muy clara y definida...» conservaba su «plena adhesión al régimen constitucional» y repudiaba «cualquier golpe de Estado, venga de donde venga». ⁶ Agregó que la DC podría eventualmente apoyar en el Parlamento la declaración del Estado de Sitio solicitada por el Presidente Allende siempre que el primer mandatario procediera a cambiar su Gabinete, tanto más cuanto que en él había un ministro acusado constitucionalmente.⁷

Sin embargo, esta posición fue bruscamente modificada. Al día siguiente el PDC emitió un pronunciamiento en el que sostuvo que en las circunstancias no era recomendable implantar el Estado de Sitio puesto que al gobierno le bastaba con la declaración de Zona de Emergencia para controlar el país. Según la colectividad, el rechazo a la solicitud presidencial sobre la declaración del Estado de Sitio, impediría «las constantes arbitrariedades del Gobierno», así como también el atropello a las libertades públicas por parte de este.⁸ La DC no explicó las razones del radical cambio que experimentó su posición sobre la materia en lapso de menos de 24 horas.⁹

El 3 de julio la Cámara de Diputados rechazó la solicitud presidencial referente a la declaración del Estado de Sitio. Al otro día el Senado hizo lo propio. Mientras tanto, en el Ejército existían fuertes presiones internas en orden a no investigar a Patria y Libertad, organización que el 29

de junio había estado tras las acciones del Regimiento Blindado No 2.¹⁰

La sensibilidad de la UP frente a tales posturas de las colectividades opositoras quedó reflejada en la declaración que entonces hiciera el diputado comunista Jorge Insunza. El parlamentario sostuvo: «la actitud asumida por los partidos de oposición en el Parlamento refleja que son muchos los personeros de los partidos políticos reaccionarios que tienen las manos metidas hasta el codo en el complot sedicioso que intenta desencadenar la guerra civil en nuestra patria». ¹¹ Para la UP, en efecto, tal comportamiento de la oposición, en particular de la derecha, sólo se explicaba como parte de un proceso deliberado conducente a un enfrentamiento armado.

Sin embargo, a diferencia de lo que creía el conglomerado de gobierno, la derecha no perseguía tal finalidad, con sus secuelas de división entre los propios militares. Más bien, como hemos visto más atrás, deseaba un pronunciamiento del conjunto de las FFAA dirigido a deponer al gobierno. Este propósito, por cierto, seguía encontrando su obstáculo principal en la existencia de una cúpula constitucionalista en los institutos castrenses. Por lo mismo, el núcleo de la derecha, agrupada en el PN, a diferencia de la línea que impulsaba Patria y Libertad, no pretendía estimular levantamientos aislados en tales o cuales unidades. Sus miras, por el contrario, llegaron a centrarse en aislar y remover a las cúpulas constitucionalistas como premisa para un pronunciamiento institucional. En forma paralela, con ese mismo fin, pretendía continuar debilitando y deslegitimando al gobierno.

En cuanto a la DC, cabe decir que en esta coyuntura empezó a experimentar una importante inflexión en su política. La colectividad, como se ha visto en los capítulos anteriores, se había caracterizado por una estrategia consistente en enfrentar al gobierno en el marco constitucional. Formalmente ello seguía siendo así. Pero en el fondo algo había cambiado con la asunción de la directiva de Patricio Aylwin. La DC, en efecto, no sólo se había negado a aprobar la declaración de Estado de Sitio, sino que rechazó luego toda posibilidad de diálogo con el Ejecutivo, aunque el objeto de dicho diálogo fuese el fortalecimiento del orden legal, como lo planteara el Presidente de la República.

Lo que ocurría era que, bajo sus propias modalidades, este partido de hecho se estaba inclinando por poner término desde ya al gobierno de la UP. El 1 de julio Eduardo Frei había comunicado al General Bonilla que la DC estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo sólo si este aceptaba la conformación de un gabinete cívico militar. ¹² Esto obviamente, suponía desplazar a la UP como eje del gobierno y definir a los militares como un elemento central de la solución política. El Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, en sus Memorias refiere que en sus esfuerzos por gestionar una tregua entre gobierno y oposición, el 8 de julio procedió a

reunirse con Eduardo Frei. En la oportunidad éste le manifestó que el diálogo con el Ejecutivo era inviable en razón de la existencia de grupos armados en la UP y el MIR. Agregó que la única solución posible era la conformación de "un gabinete capaz de ordenar al país".¹³

Esta modalidad, que luego en la izquierda fuera denominada como «golpe blando», constituyó, por cierto, una inflexión en el desarrollo de la política del PDC.

Pese a todo Salvador Allende siguió abrigando esperanzas de llegar a algún tipo de acuerdo con este partido. El Presidente, así como también el «polo gradualista», no estaba del todo consciente de la magnitud del involucramiento de la DC en una salida política que implicaba, bajo una u otra variante, poner fin al gobierno de la UP. Distinta era la posición del «polo revolucionario», que basaba su negativa a todo trato con aquella no sólo en consideraciones estratégicas de diversa índole, sino también en el supuesto de que era parte de la «sedición reaccionaria».

Salvador Allende, en todo caso, sin perjuicio de algunas referencias genéricas que hiciera sobre el tema, todavía postergó su decisión de lanzar la iniciativa formal de un diálogo con la DC. Resolvió dar prioridad a la incorporación de los militares al gabinete. Sin embargo, debió cejar en el intento ante las dificultades surgidas tanto al interior de la UP como del Ejército.¹⁴ El primer mandatario se vio entonces obligado a formar un equipo ministerial enteramente civil, con miembros de la UP. El objetivo del nuevo ministerio consistió en llevar a cabo un plan de emergencia cuyos puntos principales contemplaban el fortalecimiento de la autoridad política, económica y administrativa del gobierno, asegurar el orden público y la convivencia cívica, haciendo posible sobre esas bases el abordaje de los problemas más importantes de la deteriorada economía nacional.

2. El Posesionamiento de los actores para abrir paso a sus respectivas salidas políticas

Paralelamente a los ajustes tácticos operado por los diferentes actores, a lo largo de julio se fue produciendo, por parte de cada uno de ellos, un esfuerzo orientado a posesionarse de las variables que consideraban relevantes para su correspondientes salidas.

2.1 Los Posicionamientos de la Izquierda

2.1.1 La Toma de empresas y la cuestión del Poder Popular

En la izquierda, quizás el elemento más relevante a destacar, junto con el esfuerzo del gobierno por mantener la lealtad de las cúpulas milita-

res, consistió en una masiva movilización de los trabajadores orientada a posesionarse físicamente de las empresas más importantes del país. Los centros laborales pasaron a ser concebidos por aquella como núcleos de resistencia ante posibles nuevos intentos de golpe y, al mismo tiempo, como los lugares naturales de agrupamiento de la base laboral.

El 30 de junio, al día siguiente de frustrado el alzamiento del Regimiento Blindados Número 2, la CUT había dado órdenes a sus afiliados para que tomaran sus centros de trabajo, fortalecieran los Cordones industriales y aseguraran una dirección única en ellos. Les pidió a la vez que estuviesen prestos a recibir ordenes de la presidencia de la República. Fue esa masa laboral la que, a instancias de la misma CUT, confluyó esa noche al centro de Santiago rodeando La Moneda en una gigantesca manifestación, en la que intervino Salvador Allende. Algunos trabajadores, especialmente los adictos al «polo revolucionario», pedían armas y, como se indicó más arriba, exigían el cierre del Parlamento.

Luego, el Consejo Directivo Nacional de la CUT instruyó a sus bases para que organizara la defensa y protección de las industrias tomadas, se crearan turnos de vigilancia y se mantuviera un estado de alerta permanente. El 2 de julio la CUT ordenó no entregar las fábricas hasta nueva orden, pero sin por ello detener la producción.

Lo anterior encontró una acogida inmediata y masiva entre amplios sectores laborales. Similar recepción tuvieron los llamados de las organizaciones del poder popular. ¿Qué había detrás de todo ello? Más que cualquiera operación de superestructuras, lo que había en curso era una transformación cualitativa del sujeto popular que el mismo proceso político había venido desarrollando gradualmente. Dicho sujeto, a la luz de los acontecimientos del 29 de junio, se sintió amenazado e indefenso, tomó cuenta de que el proceso en curso podía ser revertido y que existía una férrea voluntad en ese sentido por parte de las fuerzas sociales y políticas contrarias a él. Ante ello, acentuó su voluntad de ser protagonista de la historia, lo que se tradujo en una eclosión de nuevas y masivas organizaciones. Así, fueron creados nuevos Cordones Industriales y Comandos Comunales, dispuestos incluso a establecer formas de poder local.

En el plano de la política partidista, la maciza realidad del poder popular implicaba para la izquierda dirimir su naturaleza y su funcionalidad. Esta era una cuestión muy compleja cuya resolución ciertamente dependía del concepto que se tuviera del proceso revolucionario en curso. El MIR siguió concibiendo al poder popular como un poder paralelo, al que se empeñaba en dotar de capacidad de defensa militar efectiva y de vinculación con los soldados y tropa de las FFAA dentro de un esquema que suponía la ofensiva. El PC, en cambio, lo consideró como una red de organiza-

ciones de la sociedad civil que debían apoyar y defender al gobierno.

En la UP las diferencias de concepción sobre la materia formalmente se habían dirimido en el Congreso del Partido Federado, celebrado a fines de junio, pocos días antes del tanquetazo. Allí Salvador Allende había propugnado un poder popular no opuesto al sistema institucional ni al gobierno, sino más bien funcional a ambos. Al PC, más allá de su discrepancia respecto de toda concepción alternativista del poder popular, adicionalmente le preocupaba que este cuestionara a la CUT como «expresión máxima de los trabajadores organizados». Estaba aquí, pues, también involucrada la cuestión de la hegemonía al interior del movimiento laboral, precisamente en la medida en que en lo esencial las organizaciones del poder popular no estaban lideradas por el PC, sino más bien por el MIR y el PS.

En el Congreso del Partido Federado de la UP se había intentado una formulación de consenso sobre el punto, declarándose una voluntad de «impulsar el desarrollo de todas las organizaciones del poder popular y su adecuada coordinación con las organizaciones históricas de la clase obrera y con el gobierno».¹⁵ De tal modo, se confió haber arribado a una síntesis. El PC había terminado abriéndose a la realidad de los Cordones Industriales y Comandos Comunales. Los peligros de que la vía institucional se frustrara a través de un golpe de Estado lo obligaban a colocarse en la alternativa de la guerra civil o de formas no institucionales de enfrentamiento, que en todo caso aspiraba a evitar, contando entre otras cosas, con el efecto disuasivo del propio poder popular. Aparte de su exigencia de que no fuera opuesto al gobierno ni a la institucionalidad, el PC sostuvo que sus directivas debían ser elegidas por las bases. De este modo pretendía tener parte en su conducción, desplazando de ella en alguna medida a los elementos del MIR y del Polo revolucionario.

Otra cuestión importante a resolver en relación al poder popular se refería a si debía ser armado o no. Al respecto la política del polo gradualista consistía en incentivar cierta autodefensa popular mediante elementos caseros, pero de ningún modo era partidario de la repartición de armas. Ello, a su juicio, hubiera implicado romper con el monopolio que sobre la materia la Constitución asignaba a las FFAA y, en consecuencia, suponía abandonar la vía institucional, estimulando de paso una inmediata intervención militar que pondría fin al gobierno. En opinión del polo gradualista los Cordones Industriales y los Comandos Comunales debían recibir armas sólo en condiciones muy precisas: en caso de un nuevo intento de golpe, en acuerdo con el sector constitucionalista de las FFAA, para actuar junto a ellas reivindicando la «defensa de la constitucionalidad y el orden democrático frente a una sedición fascista». En este sentido, la concepción que el polo gradualista tenía del poder popular era más bien defensiva.

El polo revolucionario, en cambio, hacía mucho énfasis en la capacidad de defensa militar efectiva que desde ya aquel debía desarrollar. En el PS, en todo caso, había conciencia de que, sin perjuicio de ello, no era posible repartir armas. El MIR era quien hacía los mayores esfuerzos en orden a dotar a los organismos del poder popular de medios de defensa efectivos. Las consideraciones de orden legal, para esta colectividad, no eran fundamentales, puesto que su vía era explícitamente extrainstitucional.

Ahora bien, pese a ciertas innegables potencialidades defensivas que le eran inherentes, el poder popular ciertamente no podría hacer nada si las FFAA se pronunciaban en bloque contra el gobierno. Su efectividad, por tanto, estaba ligada a la eventualidad de que este lograra mantener hasta el final la lealtad de al menos una parte de aquellas.

2.1.2 La eventual ampliación del Area de Propiedad Social

La masiva toma de empresas por parte de los trabajadores adictos a la UP con motivo de intento de golpe del 29 de junio, repuso en el seno del conglomerado de gobierno la cuestión del Area de Propiedad Social.

Las presiones sobre el Ejecutivo para que procediera a llevar a la práctica nuevas requisiciones se vieron, entonces, reavivadas. Con ello rebrotaron, a propósito de esta cuestión, los conflictos al interior de la UP, en particular entre comunistas y socialistas.

Los primeros insistieron en que no cabía intervenir cualquier empresa y que había que ceñirse en esta materia estrictamente al programa de gobierno. El PC, en relación al punto, tenía adicionalmente en consideración otras razones, que estaban vinculadas a variables coyunturales. En particular, a la necesidad de abrir paso a algún tipo de diálogo con la DC a fin de estabilizar la situación del país. El intento de pasar al Area de Propiedad Social a cualquier empresa era vista, desde esta óptica, como un elemento que contribuiría a cerrar toda posibilidad de llegar a algún acuerdo con los «sectores democráticos de la oposición».

El PS, por su parte, discrepando de sus aliados comunistas, insistió en sus tesis anteriores y, más aún, las acentuó. El 20 de julio la dirección de la colectividad emitió una declaración en la cual exigió «el paso al Area de Propiedad Social de toda empresa que hoy esté tomada por sus trabajadores». En aras de este propósito convocó a «una movilización de la clase (obrero)» que permitiera imponer tal orientación «a los elementos vacilantes que están en el gobierno y la CUT...».¹⁶ La alusión a los “elementos vacilantes” iba ciertamente dirigida al PC y al propio Salvador Allende.

El MIR coincidía con la posición del PS, pero la extremaba aún más. En instructivo leído a sus militantes en una concentración en el Esta-

dio Caupolicán, esa colectividad llamó a «extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, (e) impulsar el Poder Popular como gobierno local autónomo de los poderes del Estado.»¹⁷ Aún más, el MIR proclamó explícitamente que carecía de importancia si ello contravenía al marco legal y constitucional puesto que “las constituciones expresan intereses de clase y correlaciones de fuerzas. Aquí en Chile -agregó- la clase obrera está levantando en la práctica sus propias leyes y la Constitución tendrá que cambiar en favor del pueblo”.¹⁸

En esta pugna el polo gradualista era el que, sin dudas, estaba en mejores condiciones de imponer sus criterios, precisamente en virtud de que controlaba las principales posiciones del gobierno y coincidía con los puntos de vista del Presidente de la República.

Fue así como a mediados de julio el Ejecutivo anunció su decisión de devolver ciertas empresas intervenidas cuyo paso al APS no estaba contemplada en el programa de la UP.¹⁹ Como producto de la medida se vieron agudizadas las diferencias entre los partidos del conglomerado de gobierno. En la extrema izquierda, en particular en el MIR, entonces tomó aún mayor cuerpo la idea de impulsar un poder paralelo, el que debía ganar la hegemonía dentro del proceso revolucionario.

2.1.3 La cuestión del diálogo con la DC

Las discrepancias verificadas en torno al problema del Área de Propiedad Social, en la medida que reflejaban diferencias de fondo en la UP, tenían también que manifestarse en relación a otro punto clave de la coyuntura política, a saber, el de las relaciones con la DC y la búsqueda de un posible diálogo con ella.

El presidente Allende había venido expresando desde hacía meses su voluntad de dialogar con la oposición moderada con el fin de descomprimir la situación política.²⁰ Con posterioridad al intento de golpe del 29 de junio una iniciativa tal le pareció más necesaria aún. A ello se refirió genéricamente en varias oportunidades a comienzos de julio. Al proceder así el Presidente, al parecer, esperaba una señal positiva de la DC, que en todo caso por el momento no llegó. Incluso más, el primer mandatario, luego del tanquetazo, al momento de reorganizar su gabinete intentó incorporar a él a representantes del ala progresista de la DC, pensando en Fernando Castillo Velasco. Sin embargo, la directiva de la colectividad prohibió a sus militantes integrarse al gobierno, bajo el supuesto de que lo que perseguía Salvador Allende con la medida no era otra cosa que dividir al partido.²¹

Los esfuerzos del presidente orientados a abrir un diálogo con el

PDC suponían, de otro lado, lograr el asentimiento correspondiente de parte de las colectividades de la UP. Pero esto era extraordinariamente difícil. Si bien Salvador Allende encontró de inmediato eco en el PC²² y en el PR, no ocurrió lo mismo con el PS. Este, en efecto, proclamó públicamente su negativa a tratar con la DC, sosteniendo que el único diálogo posible había que realizarlo en la base social.²³ Incluso extraoficialmente se habló que de prosperar la iniciativa del diálogo, el PS estaba dispuesto a retirarse del gobierno. El MAPU de Garretón también fue muy categórico en su rechazo a la iniciativa presidencial.

En consecuencia, hasta mediados de julio la cuestión del diálogo estuvo bloqueada por falta de voluntad políticas en uno y otro sector.

2.1.4 La cuestión de los militares

La otra cuestión conflictiva dentro de la UP y de la izquierda en general era la de los militares. Si bien en el conglomerado de gobierno había consenso en torno a la necesidad de mantener la lealtad de las FFAA al Ejecutivo, no era menos cierto que las diversas concepciones sobre el proceso político y su resolución que existían en su seno tenían que traducirse en matices y modalidades diferentes de abordar el problema.

El presidente Allende, como hemos visto, consideraba necesario fortalecer al sector constitucionalista de las FFAA, lo que suponía relegitimar el orden institucional, lo cual, a su vez, implicaba subrayar el concepto de una vía legal hacia el socialismo. Dentro de esta visión cabía asegurar el monopolio de las armas a las instituciones castrenses, oponiéndose así a la proliferación de todo tipo de organizaciones armadas paralelas. Salvador Allende en tal sentido estaba dispuesto a dar seguridades a los militares. En general, este era al punto de vista del «polo gradualista». Sin perjuicio de lo anterior, el mandatario consideraba que en caso de un golpe de Estado las organizaciones de trabajadores podrían recibir armas para colaborar con los militares leales en la defensa de la institucionalidad democrática.²⁴

El «polo revolucionario» sobre la materia, tenía, por su parte, un planteamiento más bien ofensivo, que se traducía en estilos y aún en contenidos distintos. Una de las diferencias fundamentales al respecto consistía en su tendencia a hacer una división horizontal al interior de las FFAA. Ello se puso claramente de manifiesto en julio a través de ciertos pronunciamientos y actitudes tanto del PS como del MIR, los que no dejaron de tener repercusión entre los uniformados.

El 12 de ese mes, mientras Salvador Allende intentaba cohesionar a los militares en torno a sus mandos, Carlos Altamirano, en un discurso ante una asamblea de dirigentes de Cordones Industriales, hizo un llamado «a

los soldados, marinos, aviadores y carabineros a desobedecer a sus oficiales si estos se (levantaban) contra el gobierno y los obligaban a disparar contra el pueblo». ²⁵ Este enfoque tenía algunos puntos de contacto con los postulados del MIR sobre la materia. En efecto, esta colectividad recientemente había publicado un documento en el que precisamente se sostenía que “los suboficiales, soldados y carabineros” debían “desobedecer las ordenes de los oficiales golpistas”. ²⁶

No era que Salvador Allende y el «polo gradualista» pensaran lo contrario si se producía la eventualidad de un golpe. Lo que variaba era por un lado la forma y la oportunidad del llamamiento de Altamirano y, por el otro, la referida contraposición entre oficialidad y tropa, que el mandatario y el polo gradualista se negaban a hacer.

A la división horizontal de las instituciones armadas implicada en ciertos pronunciamientos del PS y del MIR agréguese la práctica del polo revolucionario consistente en presentar en las manifestaciones públicas a creciente número de sus adherentes equipados con cascos y palos de bambú, en ostentosas formaciones militares. ²⁷

Al interior de las FFAA los señalados planteamientos y conductas del polo revolucionario tenían un contundente efecto negativo para el gobierno. Al respecto, Carlos Prats relata en sus memorias el desarrollo de una reunión, celebrada el 19 de julio, entre los Comandantes de las tres Ramas de la Defensa Nacional, en la que además tomaba parte una determinada cantidad de generales y almirantes. «El ambiente se torna tenso - refiere Prats- «cuando algunos de los presentes nos plantean a los Comandantes en Jefe una creciente preocupación en la oficialidad «por la actitud pasiva del Alto Mando» frente a las tomas de predios e industrias, por la presunción de la existencia de un «ejército paralelo popular» y por los ataques de (Carlos) Altamirano y (Miguel) Enriquez a las FFAA. Otros -continúa el relato- exponen que «hay que asumir responsabilidades ante el crimen de lesa Patria...» Algunos señalan que debe aplicarse la Ley de Seguridad del Estado a Altamirano y a Enriquez; aplicar con rigor la Ley de Control de Armas, y hacer pública una declaración de los Comandantes en Jefe, señalando al gobierno su responsabilidad». ²⁸

De tal modo, era el gobierno y la UP en general los que parecían cargar con el costo político de las conductas y las concepciones de su sector rupturista.

Sin perjuicio de lo anterior, era evidente que se estaba produciendo un giro hacia la derecha en gran parte de los mandos. Ello en alguna medida no era extraño. La formación ideológica de los institutos armados tradicionalmente había sido anti izquierdista, y en primer término, anticomunista. En segundo lugar, desde el punto de vista de su extracción social, la oficia-

lidad estaba vinculada a los estratos medios acomodados y, en menor medida, a la clase alta. Esto se traduc  a en dos efectos principales. Por un lado, en que ella percib  a la realidad desde la   ptica y la sensibilidad de esos sectores, y, por el otro, en que pol  ticamente se sent  a m  s interpelada por los discursos de los partidos de orientaci  n conservadora.

Adicionalmente hay que considerar que los conceptos de orden y disciplina, propios de la vida militar, tend  an en alguna medida, consciente o inconscientemente, a ser trasladados por los uniformados al plano de la sociedad en general. Por eso, las manifestaciones callejeras, las luchas reivindicativas, en particular de los estratos subalternos, tend  an a ser vistas por ellos como un factor de caos y de desintegraci  n de la nacionalidad, frente a lo cual propend  an a pensar en soluciones de «orden». A lo anterior agreguemos la recepci  n de la Doctrina de la Seguridad Nacional, verificada a trav  s de la influencia norteamericana, que postul   que el rol de las FFAA consist  a en garantizar la seguridad interior del pa  s, definiendo para el efecto, un enemigo interno («el comunismo», o «la subversi  n», etc).

Es indudable que las concepciones constitucionalistas, arraigadas por d  cadas en las instituciones armadas, hab  an neutralizado, hasta el momento, en alg  n grado a los factores arriba sealados. Pero ahora, ante la polarizaci  n extrema que se viv  a, ellos tend  an a reemerger, con sus consiguientes efectos pol  ticos.

2.2 La Oposici  n

Los partidos opositores luego del intento de golpe del 29 de junio vieron acentuado su grado de cohesi  n. Despu  s de negar al gobierno la autorizaci  n para declarar el Estado de Sitio, su preocupaci  n central gir   en torno a la cuesti  n del poder popular y del posesionamiento de los principales centros productivos por parte de los trabajadores partidarios de la UP. Tal preocupaci  n, por cierto, no era vana por cuando ating  a a un elemento importante de la correlaci  n de fuerzas.

Que la UP estuviese aislada en el plano del Estado; que dentro de las instituciones armadas su situaci  n fuera cada vez m  s precaria, sostenida s  lo en la c  pula constitucionalista; que en la sociedad civil encontrara un movimiento contestatario muy considerable, etc, conformaba un cuadro muy propicio para la oposici  n. Esta, en efecto, pod  a pensar con fundamentos en que la derrota definitiva del gobierno estaba cerca. En ese cuadro, el movimiento de ocupaci  n de industrias y el subsecuente desarrollo del poder popular vino a constituir un contrapeso importante que hab  a que neutralizar o anular. Del mismo modo, hab  a que hacer lo propio con los mandos constitucionalistas de las FFAA, con los cuales, por lo dem  s, even-

tualmente aquel podría conectarse orgánicamente en el marco de una estrategia defensiva, como la pensada por el presidente Allende.

Pues bien, en ese contexto, el poder popular y la ocupación de industrias apareció en el discurso opositor como un elemento ofensivo, como un dispositivo de una estrategia insurreccional de la izquierda, a la que el gobierno se habría sumado. Dicho de otra forma, en virtud de los imperativos de la efectividad política, la imagen que de dicho poder se empeñó en proyectar la oposición fue aquella que respondía al concepto de la extrema izquierda, es decir, del polo revolucionario en su versión mirista.

En suma, el grueso de la oposición necesitaba que la ocupación de industrias apareciera obedeciendo unívocamente a los propósitos proclamados por el polo revolucionario en virtud de que en esa medida, por cierto, podía definírsela como una amenaza extrema, que requería de una respuesta a su nivel. Esa conceptualización, -que tenía cierta base objetiva puesto que el polo revolucionario era una realidad- permitía, en efecto, legitimar una contraofensiva capaz de involucrar a las FFAA, enfrentándolas al Ejecutivo bajo una u otra variante.

De allí que la iniciativa de la oposición durante el mes de julio en buena parte girara en torno a esta cuestión. El día 6, el PDC, el PN, el PIR y la Democracia Radical emitieron una declaración conjunta en la cual señalaron que «la institucionalidad del país se ha(bía) quebrantado como consecuencia de las «tomas» de establecimientos fabriles y el reparto de armas a los elementos extremistas, la mayoría extranjeros...»; «esta situación, incompatible con nuestro régimen republicano y democrático, -añadió- hace necesario que las Fuerzas Armadas hagan cumplir la Ley de Control de Armas, para evitar la formación de un ejército extremista, en gran parte formado por extranjeros y paralelo a las Fuerzas Armadas Constitucionales». La declaración luego acusaba al presidente Allende de haber «permitido y ratificado lo anterior», colocándose con ello «al margen del sistema institucional chileno», cuestión que, según se anunciaba, sería «analizada por el Congreso Nacional... con el objeto de restablecer la legalidad».²⁹

Ejército paralelo, participación de extranjeros y violación de la Constitución y las leyes. Cada uno de estos elementos eran por sí mismos altamente interpelantes respecto a las FFAA.³⁰ Por si eso fuera poco, la oposición hacía un llamado explícito a los uniformados para que tomaran cartas en el asunto a través de la ley sobre control de armas.

Luego de la citada declaración, ante innumerables llamadas anónimas portadoras de diversas denuncias sobre tenencia de armas, comenzó un prolongado proceso de allanamientos de industrias por parte de los militares, el cual no estuvo exento de violencia. Ello de paso permitirá al ala

más radicalizada de la oposición, y a los mismos sectores de las FFAA interesados en una intervención militar, evaluar las potencialidades de resistencia que disponían las empresas en tanto lugares de agrupación y defensa de los trabajadores que apoyaban a la UP.

Ahora bien, sin perjuicio de los elementos en común que tenía la política de ambas alas de la oposición, y más allá de sus pronunciamientos en conjunto, que evidenciaban el grado de ensamblamiento que sus componentes habían alcanzado, cada partido por separado continuó desarrollando las particularidades correspondientes a sus propias estrategias.

2.2 1 La nueva postura del PDC: hacia el «golpe blando»

Lo primero que hay que tener en cuenta es el hecho de que esta colectividad estimaba que su proceder era decisivo en lo referente a cómo se resolvería el conflicto nacional. En segundo término, hay que subrayar que ella estaba siendo interpelada con cierta regularidad por parte de Salvador Allende con el fin de abrir paso a un diálogo conducente a fortalecer el marco institucional de los conflictos. Al mismo tiempo recibía presiones de la derecha en orden a radicalizar su política. La DC, en consecuencia, tenía que meditar cuidadosamente sus decisiones a fin de que efectivamente sirvieran a los efectos de abrir paso a su propia salida.

La naturaleza de esta salida fue hecha pública el 5 de julio a través de una declaración que Patricio Aylwin hiciera a propósito de la conformación del nuevo gabinete. El presidente de la DC dijo entonces que su partido consideraba que en esas circunstancias «la mejor garantía para el restablecimiento de la normalidad democrática (era) la incorporación institucional de las Fuerzas Armadas al Gobierno, con poderes efectivos para realizar las rectificaciones... indispensables para asegurar el imperio de la Constitución y de las leyes».³¹ De una u otra forma esta fue la posición que Eduardo Frei expresara al General Bonilla el 1 de julio, y que transmitiría tres días después -el domingo 8- a Carlos Prats, cuando el Comandante en Jefe del Ejército desplegaba gestiones dirigidas a distensionar la situación entre oposición y gobierno.³²

Al día siguiente de que Patricio Aylwin expresara las referidas opiniones, el PDC emitió una declaración pública planteando una serie de exigencias perentorias al gabinete formado después del tanquetazo. Condicionó a su cumplimiento estricto la colaboración del PDC para los efectos de normalizar la situación del país. Entre esas exigencias figuraban el «inmediato desarme de los grupos armados al margen de la ley y la inmediata devolución de las industrias usurpadas en los últimos días»; el «respeto a las atribuciones de los Poderes Legislativo, Judicial, y de la Contraloría

General de la República...»; el término «de los decretos de insistencia»; y el «fin (a) la utilización partidista y odiosa del Canal Nacional de Televisión...».³³

La declaración agregó que «la actitud del Partido Demócrata Cristiano frente al gobierno depender(ía) de la forma como este abord(ara) las tareas señaladas». «Si el nuevo ministerio asume claramente su responsabilidad para hacer posible el logro de estos objetivos, -añadió-, la Democracia Cristiana...no rehuirá sus deberes patrióticos para facilitar el consenso democrático indispensable para restablecer la normalidad del país». Pero -continuó- «si el gobierno no cumple de inmediato estas tareas, sobre él recaerá la responsabilidad histórica de lo que suceda en Chile».³⁴

¿En qué consistirían los sucesos por venir si el Ejecutivo no aceptaba las exigencias de la DC y cuya responsabilidad esta se apresuraba a descargar sobre los hombros de aquel? ¿Estaban ya definidos? ¿Consistirían, quizás, en una eventual declaración de ilegitimidad del gobierno por parte del Congreso con el fin de permitir que las FFAA pidieran la renuncia a Salvador Allende o para excluir a la UP del gabinete imponiendo un ministerio de administración cívico-militar? ¿Eran estas variables las que se barajaban ya en la directiva demócrata cristiana?

Sean cuales fueren las respuestas a tales interrogantes, lo cierto es que el día 11 de julio Patricio Aylwin declaró en el Senado que su partido no dialogaría con el gobierno debido a que persistían los grupos de civiles armados. Al mismo tiempo hizo referencia al incumplimiento del Estatuto de garantías Constitucionales suscrito en 1970 por parte de aquel y sostuvo que, en virtud de todo lo anterior, no existía la confianza requerida para los efectos de iniciar contactos. De tal modo, la colectividad continuó con una posición de extraordinaria dureza.

Sin embargo, no era esta la actitud de quienes habían conducido al PDC hasta hacía poco. Así, Renán Fuentealba, en declaraciones de prensa hechas desde Madrid, hizo un llamado al diálogo entre su colectividad y el gobierno con el fin de evitar «el derrumbe de Chile». A la par expresó que el PDC estaba en contra el golpe y de la dictadura y que, por el contrario, favorecía un proceso de socialización dentro de la democracia.³⁵ Todo indica que los alicaídos sectores progresistas de la DC eran partidarios de ir a una negociación con el gobierno pues consideraban que la dirección de los acontecimientos conducía a una inexorable ruptura violenta de la institucionalidad. Pero el control del ala conservadora sobre el partido -de hecho dirigida por Eduardo Frei- era total y el curso político que seguía, más que a un acuerdo, se orientaba a lograr una capitulación incondicional de la UP y de Salvador Allende, con lo cual, por cierto, contribuía a polarizar el escenario político.

2.2.2 El Partido Nacional: *nuevos esfuerzos por bloquear cualquier salida electoral*

La derecha, por su parte, continuó con su política radicalizada e insistió en la deslegitimación del gobierno. Frente al nombramiento de un nuevo gabinete por el Presidente Allende, emitió una declaración que giró en torno a unas pocas ideas centrales. En primer término sostuvo que el gobierno insistía en las mismas políticas que habían llevado a Chile a la crisis. Luego, afirmó que el movimiento de la ocupación de industrias servía a los fines del «sometimiento político de los trabajadores y al enriquecimiento de los jerarcas» de los partidos de la UP a través del mercado negro. En tercer lugar, marcó un fuerte énfasis en la cuestión de los militares. Afirmó que se había «desencadenado una campaña destinada a debilitar y dividir a las Fuerzas Armadas». Agregó: «en esta maniobra, el Partido Comunista opera a través de sus satélites: FTR, MAPU y un sector socialista. A los miembros de las Fuerzas Armadas -sostuvo- se los empieza a calificar de «reaccionarios» o «fascistas» en un desembozado intento por crear las condiciones para una purga interna que haga posible la eliminación de todos aquellos que se nieguen a ser cómplices en la desintegración de Chile».³⁶

Más adelante, la declaración descalificó el llamado del gobierno a fortalecer la institucionalidad democrática por cuanto esta ya no existiría: «el mismo gobierno la ha destruido para reemplazarla por el atropello sistemático de la Constitución y las leyes», añadió.³⁷

Dos cosas habría quizás que destacar en esta declaración. Por un lado la clara identificación que procedió a hacer entre el PC y el «polo revolucionario», de acuerdo a lo cual este no sería más que un instrumento de aquel. Por el otro, figura el hecho de que implicó pasar a un nivel más alto en el uso de imágenes generadoras de temor, en este caso al interior de los institutos armados.

La pretensión de concebir al polo revolucionario como un mero instrumento del PC era, sin dudas, muy funcional a una política opositora que buscara una salida extrainstitucional, precisamente porque el polo revolucionario también se orientaba hacia ella, sólo que desde la izquierda. La identificación unívoca de las políticas de la izquierda más radical con las del gobierno era útil a la derecha precisamente porque declaraba inexistente una vía institucional. Esta podía así ser presentada como un mero enmascaramiento de estrategia insurreccional «marxista leninista» clásica, ante cuya eventualidad, a diferencia de «la vía chilena», los militares tenían una clara doctrina reactiva. Por lo mismo, el reconocimiento de una vía institucional en la izquierda hubiera implicado, de una u otra forma, contribuir a fortalecer las posiciones constitucionalistas al interior de las FFAA.

Y eso era lo que el PN no podía permitirse.

En relación a la segunda cuestión, es decir, la referente al uso de imágenes generadoras de temor, en este caso al interior de los institutos armados, se apuntaba hacia el mismo fin: generar una sensación de inseguridad e incertidumbre orientada a estimular respuestas totales, movidas por el miedo más que por la razón, y, por tanto, ajenas a cualquier moderación.

Es cierto que la mención a las «purgas» y a la «eliminación de quienes se nieguen a ser cómplices» se explica también por imperativos coyunturales de extraordinaria relevancia. Hay que tener en cuenta que la declaración del PN fue emitida a poco más de una semana del fallido intento de golpe del 29 de junio, momento en que estaba en curso la investigación sobre las conexiones del movimiento del Blindado No 2 con otros sectores de las FFAA. En ese contexto, las posibilidades de que se llamara a retiro a altos oficiales no estaba excluida, lo que hubiera debilitado al creciente sector deliberante de los militares, lo cual, en fin, disminuiría las posibilidades de una salida rupturista como la propugnada por la derecha. Era natural, entonces, que esta se esforzara por crear un espíritu de cuerpo al interior de los uniformados que dificultara al gobierno cualquier intento de llamar a retiro a determinados oficiales.

En los días siguientes el rupturismo del PN continuó evidenciándose a través de la actuación de sus personeros. Fue así como en una intervención en el Senado a propósito del problema de «los grupos armados», el Senador Francisco Bulnes, luego de denunciar lo que le parecía una serie de irregularidades y procedimientos inconstitucionales del gobierno, una vez más lo declaró ilegítimo. A la par procedió a destacar el papel de las FFAA como guardianes de la institucionalidad, llamándolas a cumplir con ese rol.³⁸

A mediados del mes de julio fue lanzada por la derecha otra iniciativa política que pretendía tener importantes proyecciones. El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Jaime del Valle, en efecto, procedió a hacer una denuncia pública en el sentido de que las elecciones parlamentarias de marzo habían estado viciadas en virtud de que los registros electorales habían sido adulterados. Parlamentarios de toda las colectividades de la oposición se hicieron eco de la denuncia y en declaración pública procedieron a solicitar se constituyera una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

Más allá de la deslegitimación que todo ello implicaba para la UP, los alcances objetivos de esta iniciativa radicaban en que contribuía a descartar toda solución al conflicto nacional que supusiera una consulta ciudadana, precisamente porque no existirían registros electorales confiables.

De este modo, luego del fallido intento de golpe del 29 de junio, la orientación rupturista de la derecha continuó desarrollándose.

2.2.3 Patria y Libertad: lucha armada desde la clandestinidad

Luego del 29 de junio la situación de Patria y Libertad varió sustancialmente. El asilo de sus principales dirigentes en la embajada de Ecuador puso de manifiesto su participación en la intentona golpista del Regimiento Blindado No 2. Con ello esta organización difícilmente podría continuar actuando a la luz pública.

Acordes con tal realidad, Roberto Thieme y Ernesto Muller, dirigentes de la agrupación, en una conferencia de prensa celebrada en un restaurant de la localidad precordillerana de El Arrayán, afirmaron que Patria y Libertad pasaba a la clandestinidad, desde donde lucharía «hasta las últimas consecuencias para derrocar al gobierno de Allende».³⁹

Lo anterior de algún modo implicaba una suerte de reivindicación de la lucha armada, en la que en cierta medida esta organización, desde hacía un tiempo, de hecho se encontraba involucrada. Durante el mes de julio, en efecto, hubo una eclosión de actos terroristas, que luego se verán intensificados.

Los anuncios hechos por Thieme y Miller, más la evidente participación de Patria y Libertad en los sucesos del 29 de junio, obligaron a los restantes partidos opositores a deslindarse claramente de la agrupación. Fue así como el 17 de julio aquellos procedieron a hacer pública una declaración conjunta en la que sostuvieron que la vía adoptada por Patria y Libertad se contraponía «al camino elegido por la oposición democrática».⁴⁰

A lo largo del mes de julio, junto con el aumento de la tensión política, la violencia se desarrolló notablemente, en especial bajo la forma de terrorismo. El día 6 en la capital se produjeron dos atentados dinamiteros. Uno de ellos se verificó en las inmediaciones de las antenas de los canales de Televisión Siete y Nueve.⁴¹ Al día siguiente en Iquique fue incendiado un local de la CUT. El peritaje técnico determinó que el siniestro había sido intencional. Ante ello se dictó una orden de detención contra el jefe territorial de Patria y Libertad.⁴² El 15 en la noche hubo cuatro atentados en Viña del Mar, los que afectaron a residencias de oficiales de la Armada.⁴³ El 16 se llevó a cabo un grave atentado en Antofagasta cuando fuera dinamitado el puente ferroviario de la Quebrada Carrizo, por el que circulaba el tren desde esa ciudad hacia Bolivia.⁴⁴ En este clima, la Armada, con el fin de prevenir los atentados que habían venido sucediéndose durante los últimos días, dispuso vigilancia especial para todas las reparticiones militares y navales, así como también para aquellas poblaciones en las cuales habitaba personal uniformado.⁴⁵

Las señaladas acciones de violencia, entre muchas otras, contribuían

considerablemente al enrarecimiento del clima político del país, dificultando adicionalmente la búsqueda de algún entendimiento que aliviara la tensión. Durante la segunda mitad de julio el terrorismo se verá notablemente incrementado, tanto cuantitativa como cualitativamente.

3. La Intervención de la Iglesia Católica abre paso al diálogo Gobierno-DC

Como se ha señalado más atrás, el presidente Allende estaba empeñado en llevar a cabo negociaciones con la DC con el fin de descomprimir la situación política y fortalecer el orden institucional. Sin embargo, la iniciativa no podría prosperar de mantenerse la actitud negativa que sobre el punto mostraba ese partido. Para resolver la impasse el mandatario decidió apelar a la Iglesia Católica. Fue así como solicitó a la jerarquía eclesiástica interpusiera sus buenos oficios. La solicitud del presidente tuvo buena acogida. El 16 de julio el Cardenal Raúl Silva Enríquez hizo un llamado a evitar la lucha armada y lograr la paz. Invitó a los involucrados a dialogar y a buscar puntos de consenso con el fin de lograr «justicia para todos y las transformaciones sociales necesarias para elevar el standard de vida del pueblo».⁴⁶

En la izquierda el PC, a través de su secretario general, Luis Corvalán, respondió positivamente a la iniciativa del Cardenal.⁴⁷ El MAPU de Gazmuri, la IC y el PR hicieron lo propio. Sin embargo, el PS declaró que no estaba dispuesto a apoyar diálogo alguno con la DC debido a que este partido se encontraría involucrado en “los planes reaccionarios para derrocar al gobierno..”.⁴⁸ Aún más, en la reunión del Comité Central socialista, convocada a fines de julio para analizar el problema, se escucharon voces que pedían el retiro del PS del gobierno si este pactaba con la DC.⁴⁹ A la semana siguiente Adonis Sepúlveda expresó la posición de la colectividad en una reunión con los Cordones Industriales de Concepción. Allí sostuvo que su partido no capitularía jamás. Agregó que no podía “existir diálogo entre víctima y victimario”, y que a lo más que se podría llegar al respecto era a una tregua “apoyada en la fuerza de la clase obrera”⁵⁰.

Fuera de la UP el MIR también se mostró contrario a la iniciativa de Salvador Allende y del Cardenal en virtud de que, a su juicio, el diálogo, escondía «un proyecto de capitulación ante las exigencias de las clases patronales».⁵¹ Como alternativa a ello el MIR propuso lanzar una ofensiva revolucionaria.

El punto clave, sin embargo, radicaba en la actitud que adoptaría la DC. El 19 de julio Patricio Aylwin sostuvo que su partido, sensible ante el llamado de la Iglesia, estaba dispuesto al diálogo siempre que el gobierno

procediera a desarmar a los grupos de extrema izquierda y, a la par, procediera a devolver las industrias tomadas por los trabajadores proclives a la UP.⁵² El PN, en tanto, se negó a referirse a la materia, al tiempo que se esforzó por evitar cualquier entredicho con la jerarquía Católica.

De tal modo, durante la última parte de julio, debido a la intervención de la Iglesia, parecían abrirse buenas posibilidades de distender el cuadro político y generar una situación completamente nueva.

El 26 de julio el presidente Allende, -en el fondo respondiendo al pronunciamiento que Patricio Aylwin hiciera el día 19-, en un discurso ante el Plenario de Federaciones de la CUT, definió ocho puntos que deberían posibilitar el diálogo con el PDC y evitar la guerra civil. Ellos eran los siguientes: 1) generar un consenso mínimo en orden a afianzar el régimen institucional y la autoridad del gobierno; 2) rechazar toda posibilidad de formación de estructuras militares paralelas, marginando a las FFAA de los conflictos políticos; 3) desarrollar un poder popular vinculado al gobierno y no antagónico con el régimen institucional; 4) reafirmar la vía institucional establecida en el programa de la UP; 5) definir con precisión las competencias correspondientes a cada uno de los poderes del Estado; 6) asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho, lo que suponía poner fin al bloqueo legislativo y desarrollar el orden jurídico; 7) definir el régimen de propiedad de las empresas, precisando legalmente los límites del Área de Propiedad Social de la Economía; y 8) implementar medidas económicas concretas orientadas a detener la inflación, a asegurar la distribución y el desarrollo económico del país.⁵³

Ese mismo día, jueves 26 de julio, Salvador Allende procedió a enviar una nota a la directiva del PDC invitándola a asistir a La Moneda el lunes 30 con el fin de iniciar las conversaciones.

Sin embargo, paralelamente a este desarrollo, y con la evidente voluntad de frustrarlo, se desataron fuertes y variadas iniciativas que intentaban replantear la lucha en el plano más extremo. Así, durante la madrugada del 27 fue asesinado en su domicilio el Edecán Naval del Presidente de la República, en el contexto de una serie de otros actos terroristas. Veinticuatro horas antes había comenzado una huelga nacional indefinida lanzada por la Confederación de Dueños de Camiones de Chile.

Tales acontecimientos, sin embargo, no lograron alterar las iniciativas tendientes al diálogo. El PDC, en efecto, a través de Patricio Aylwin, aceptó la invitación presidencial y anunció que concurriría a La Moneda. Adicionalmente declaró que concordaba con la mayor parte de los puntos que Salvador Allende había definido como base de las conversaciones. Señaló, en fin, que también coincidía con la tesis del mandatario referente a la necesidad de un consenso mínimo dirigido a fortalecer el régimen

institucional. Dos cuestiones, sin embargo, le parecían claves para lograr resultados positivos. En primer término, «el desarme de cualquier grupo armado al margen de la Constitución», y, en segundo lugar, la existencia de un ministerio que diera plenas garantías al país de que lo acordado en el diálogo se cumpliría efectivamente. Sobre esta base, Aylwin sostuvo que su partido acudiría a La Moneda «en el claro entendido de que esta (era) la última oportunidad».⁵⁴

El viernes 27 el PN, a través del diputado Mario Arnello, expresó su posición sobre las conversaciones entre el gobierno y el PDC. El parlamentario sostuvo que «el diálogo, cuando se lo presenta bajo las condiciones de aceptar la mantención de las arbitrariedades, inconstitucionalidades e ilegalidades realizadas por el gobierno del señor Allende, no es diálogo democrático, sino complicidad en los delitos cometidos o debilidad inaceptable...».⁵⁵

El domingo 29 apareció en la prensa una importante declaración de la Comisión Política del PN. En ella se reafirmó el rumbo rupturista de la colectividad. Refiriéndose a la cadena de actos de violencia en curso, y en particular al reciente asesinato del Edecán Naval del Presidente de la República, la declaración sostuvo: «el gobierno ha sido definitivamente sobrepasado y ya no es capaz de garantizar el orden interno ni los derechos, la seguridad o la vida de las personas». A partir de tal premisa agregó que constituía «una utopía pensar que este mismo gobierno pueda frenar la caída o rectificar sus rumbos. En esta materia -agregó, en obvia referencia al diálogo- las promesas y compromisos del Presidente de la República no se han cumplido nunca. Y ni aún suponiendo que tuviera ahora la más firme voluntad de hacerlo, es evidente que los dirigentes de su propio partido y de los otros sectores marxistas no se lo permitirán».⁵⁶

La Comisión Política del PN agregó que, «frente a hechos tan claros y reiterados» no cabía «seguir esperando y dando más tiempo a los grupos extremistas para aumentar sus efectivos armados y asegurar su éxito en el propósito de instaurar la dictadura total». En base a estas consideraciones, el PN reiteró su tesis sobre la necesidad de que el Congreso Nacional tomara «medidas concretas para restablecer la normalidad institucional». Pero en esta oportunidad el PN dio un paso adicional: hizo un llamado implícito pero claro, a las FFAA para que actuaran: «sólo la intervención de quienes representan los valores permanentes de la nacionalidad, por encima de las banderías políticas, y que cuentan al mismo tiempo con la confianza popular, hará posible crear una nueva institucionalidad que, inspirada en la tradición chilena, logre la unidad interna, asegure la libertad, e interprete la rebeldía de un pueblo que quiere romper el estancamiento, la dependencia y la miseria», sostuvo.⁵⁷

Así, pues, la estrategia rupturista propugnada por la derecha quedaba una vez más expuesta con toda claridad: no cabían diálogos, había que avanzar hacia el desenlace definitivo mediante un pronunciamiento del Congreso Nacional y la intervención de las FFAA, dando lugar luego a una total reestructuración del Estado, con la activa participación de los militares.

Ciertamente que todo esto implicaba una considerable presión sobre la DC, la que no deseaba aparecer como una fuerza ingenua, engañada una y otra vez por el gobierno, suscribiendo pactos que este no estaría en disposición de cumplir, como lo sostenía la derecha. Tampoco la DC quería romper la unidad opositora ni contradecir a aquel movimiento de la sociedad civil que no deseaba acuerdo alguno con el Ejecutivo, sino su remoción.

Con el objeto de evitar desencuentros con las demás fuerzas opositoras en torno a estas cuestiones, el 29 de julio Patricio Aylwin procedió a reunirse simultáneamente con los representantes de todas ellas. En la oportunidad el líder del PDC procedió a recoger opiniones e intercambiar ideas sobre lo que se le plantearía al Presidente de la República.⁵⁸ Al día siguiente, lunes 30, el diálogo con el gobierno comenzó en el Palacio de La Moneda.

4. Simultáneamente estallan nuevos factores desestabilizadores: terrorismo desatado y nuevo paro de los transportistas

Pero, como se indicó más arriba, al mismo tiempo que se desbloqueaba la iniciativa del diálogo entre el Gobierno y la DC debido a la intervención de la Iglesia, se comenzaron a desatar nuevos y aún más graves elementos desestabilizadores de la situación, precisamente con el fin de frustrar las posibilidades de una salida moderada como la que aparentemente se abría. Entre esos elementos los más importantes fueron dos: 1) el estallido de la huelga nacional indefinida declarada por la Confederación de Dueños de Camiones de Chile; y 2) una intensificación sin precedentes de las acciones terroristas. Con ello, de otra parte, toda apariencia de distensión política se esfumaba en el mismo momento de su gestación.

La huelga de los dueños de camiones se inició el 25 de julio. La causal invocada fue el eventual incumplimiento por parte del Ejecutivo, de los acuerdos a que la Confederación había llegado a comienzos de noviembre de 1972 con el entonces Ministro del Interior, Carlos Prats, al ponerse término al paro de octubre.

El gobierno, por su parte, declaró que dichos acuerdos se habían cumplido en su integridad y que el motivo del relanzamiento de la huelga de los transportistas en absoluto era gremial, sino que obedecía a claras motivaciones políticas. En virtud de ello ordenó la requisición de todos los

camiones que hubiesen adherido al movimiento, para cuyos efectos se nombró un interventor especial.

Sin embargo, los huelguistas opusieron seria resistencia a la medida y se atrincheraron en distintos lugares a lo largo del país, concentrando cientos de camiones en determinados puntos. Una de las dificultades principales con que se encontró el gobierno en su empeño de quebrar el movimiento radicó en el hecho de que los propietarios de camiones comenzaron a recibir una subvención diaria que en promedio era superior a los ingresos que se obtenían en una jornada normal de trabajo. Esos recursos provenían del extranjero, siendo proporcionados especialmente por el Comité de los Cuarenta, de los EEUU.⁵⁹

A lo anterior debe agregarse una serie de medidas de fuerza contra aquellos transportistas que decidían continuar laborando, lo que incluía desde atentados físicos directos, hasta medidas tales como cubrir la carretera de «miguelitos». Sin perjuicio de ello, la UP logró organizar a un sector afín entre los dueños de camiones, constituyendo el «Movimiento Patriótico de Camioneros» (MOPARE), que se mantuvo en actividades. En todo caso el MOPARE en modo alguno pudo contrarrestar el peso que poseía la Confederación Nacional, dirigida por León Vilarín.

Los efectos que en la distribución generó el paro nacional de los transportistas fueron devastadores, acrecentando las graves dificultades que en este terreno ya existían.

Los partidos opositores, por cierto, de inmediato apoyaron la huelga, y le prestaron su decidida colaboración, contribuyendo a impulsar otros movimientos paralelos, fuera a modo de solidaridad o bien en torno a reivindicaciones específicas. De esta manera se pretendía avanzar hacia una especie de huelga multigremial, como la de octubre de 1972.

Junto con esta ofensiva, el terrorismo alcanzó niveles inéditos en el país. El 25 de julio estalló una bomba en el edificio Carlos V, donde tenían sus oficinas muchos parlamentarios de gobierno y oposición.⁶⁰ En la madrugada del 27, como se dijo atrás, en su domicilio fue muerto a tiros el Edecán Naval del Presidente Allende, capitán de navío Arturo Araya. El mismo día 27 se produjeron atentados con bombas contra ocho estaciones bencineras, mientras individuos armados procedieron a cortar las mangueras de suministro;⁶¹ en Concepción se verificó un ataque a la Radio Simón Bolívar, de propiedad del PC;⁶² en Santiago se lanzó dinamita contra la sede de la Embajada de Corea del Norte; lo mismo sucedió con Radio Victoria de Limache; mientras que otro atentado terrorista se producía contra la industria Madeco.⁶³ Ese día en Chillán se llevaron a cabo otra serie de atentados dinamiteros que provocaron la suspensión del tráfico ferroviario de la ciudad.⁶⁴

El día 29 de julio, el Subsecretario del Interior, Daniel Vergara, dio cuenta sobre 40 atentados terroristas que se habían producido en las últimas 48 horas, fundamentalmente dirigidos contra camioneros que no se habían plegado al paro y contra líneas férreas.⁶⁵ Al día siguiente, lunes 30, el diario "El Siglo" informaba que "grupos fascistas" habían procedido a marcar con cruces viviendas de militantes y simpatizantes de la UP, agregando algunas amenazas.⁶⁶ El mes terminó con nuevos atentados contra líneas férreas, el más importante de los cuales interrumpió el tráfico entre Santiago y Valparaíso, causando serios daños al puente Lastra.⁶⁷ Al mismo tiempo, en las calles, cada vez con mayor frecuencia, aparecía el lema "Yakarta ya viene".

Dentro de todos estos actos de terrorismo, el más importante fue el asesinato del Edecán Naval del Presidente Allende, el cual conmovió al país y dio lugar a nuevas recriminaciones entre gobierno y oposición. Carlos Altamirano sostuvo que los autores materiales del asesinato...fueron elementos de «Patria y Libertad», y los autores intelectuales los dirigentes de «El Mercurio», René Silva, Arturo Fontaine, Sergio Onofre Jarpa y Eduardo Frei». ⁶⁸ Estas afirmaciones le valieron el anuncio de una querrela ante los Tribunales de parte del PN.

Para la UP el asesinato del Edecán presidencial formaba parte de la escalada general que impulsaba la derecha, la que debía culminar con la guerra civil y el derrocamiento de Salvador Allende. Para la oposición, en cambio, se estaba en presencia de una acción proveniente de los grupos armados de la extrema izquierda, que el gobierno toleraba y fomentaba. Bajo estos supuestos las colectividades opositoras exigieron que la ley de control de armas se aplicara aún más rigurosamente y que las investigaciones sobre el asesinato del Comandante Araya quedaran en manos de la Armada. Por los medios de comunicación rápidamente se desató una verdadera guerra psicológica en torno al caso, dándose sucesivamente como definitivas distintas versiones sobre el mismo.

De este modo, en el marco de un terrorismo desatado y de la huelga nacional indefinida del transporte; en medio de cada vez más frecuentes allanamientos a industrias por parte de las FFAA en virtud de la Ley de Control de Armas; y en el contexto de claros llamados del PN para que los militares pusieran fin al gobierno, el lunes 30 de julio comenzaron las conversaciones entre el PDC y Salvador Allende.

5. Desarrollo y fracaso del diálogo DC-Gobierno

Desde el punto de vista formal, al comenzar el diálogo hubo consenso entre Salvador Allende y los negociadores del PDC en torno a una

serie de importantes definiciones, como las relativas a la necesidad de afianzar el orden institucional, garantizar el monopolio de las FFAA sobre las armas, delimitar a través de la ley definitivamente las áreas de la propiedad; fijar mecanismos de participación de los trabajadores en el APS; etc.

Sin embargo, prontamente emergió una insalvable diferencia de fondo. El punto se refería a cuáles debían ser las medidas políticas a tomar con el fin de materializar los propósitos arriba señalados. En tal sentido la DC planteó la necesidad de conformar un gabinete que le diera confianza al país, en el que necesariamente tendrían que participar las FFAA institucionalmente consideradas. Este gabinete debía contar con poderes suficientes como para modificar la composición no sólo de los mandos superiores del Ejecutivo, sino también sus mandos medios.⁶⁹ A él, por lo demás, le correspondería garantizar el cumplimiento de los eventuales acuerdos obtenidos entre el gobierno y la DC.

Lo que había detrás de esta propuesta era una percepción de que la UP como tal no era un interlocutor confiable y que el diálogo no se realizaba con ella. Aún más, la propuesta DC tenía como contenido fundamental la pretensión de desplazar a dicho conglomerado de su rol como eje político del gobierno, ello, por cierto, con el acuerdo del Presidente de la República. De tal modo, este debía quedar rodeado de otra fuerza con poder efectivo, que no serían sino los militares institucionalmente representados en el gabinete. En el razonamiento de la DC, una solución tal fortalecería el orden institucional y otorgaría nueva autoridad al Ejecutivo.⁷⁰ Pero ciertamente, de implementarse esta opción, ya no se trataría del mismo gobierno, sino de otro muy distinto.

De tal modo, Salvador Allende fue puesto ante la disyuntiva de tener que separarse de las fuerzas políticas y sociales de las que históricamente había sido líder, y que hasta ese momento constituían su base de sustentación. La propuesta DC, por tanto, conformaba una modalidad de desplazar a la UP del gobierno y, por tanto, de cancelar su proyecto.

Más allá de su convencimiento sobre la necesidad de integrar al gabinete a miembros de las FFAA, el primer mandatario no aceptó el fondo de la solución de la DC, es decir, rechazó la opción de cambiar la fuerza política en la que se sustentaba su gobierno. Los planteamientos del Presidente giraron en torno a un eje totalmente distinto. En particular se centraron en la idea de crear acuerdos jurídico-constitucionales que sirvieran como marco para la resolución de los diferentes conflictos. En esa dirección propuso resolver el diferendo jurídico en torno al despacho de la Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía a través de una fórmula que conciliara las tesis de la DC y las del Gobierno, bajo el supuesto que sobre esta cuestión el diálogo no podía implicar la imposición de una parte sobre

la otra.⁷¹

Bajo esa premisa Salvador Allende propuso que se despachara un proyecto de reforma constitucional que declarara «explícitamente, a contar de su vigencia, que el quórum para que el Congreso haga prevalecer su criterio, tratándose de observaciones supresivas o sustitutivas a un proyecto de enmienda a la Constitución, es de dos tercios de los miembros presentes, que representen a lo menos a la mayoría de los diputados y Senadores en ejercicio». El proyecto de reforma, a la vez, debía declarar que, «para los efectos de la tramitación de los proyectos de reforma constitucional referente a las áreas de la economía y régimen de tenencia de la tierra», el Congreso no requeriría «insistencia para que se entendiera aprobado su propio texto frente a las observaciones del Presidente de la República».⁷²

Es decir, el presidente aceptó plenamente la tesis opositora sobre la reforma constitucional. Renunció, por tanto, a imponer sus vetos y concedió que prevaleciera el criterio del Legislativo sobre la materia. La condición que, no obstante, colocó, consistió en que tal predominio se hiciera valer sólo por una vez; esto es, a propósito del conflicto presente entre ambos poderes. Para los casos futuros, el Congreso requeriría de los dos tercios para prevalecer sobre los vetos del Ejecutivo en caso de reforma constitucional. A Salvador Allende le parecía que esto era indispensable para que el régimen político mantuviera su carácter presidencial y no deviniera en parlamentario.

Junto con lo anterior, según la propuesta de Allende, se despacharían «los proyectos sobre empresas de autogestión, participación de los trabajadores en la conducción de la economía, garantías a la pequeña y mediana empresa, actividades económicas reservadas al Estado, estatuto de requisiciones e intervenciones, delimitación del área de propiedad social y sanciones contra el delito económico».⁷³

De tal modo, según la concepción del Presidente de la República, se generaría una base jurídica compartida que permitiría resolver los otros problemas planteados : afianzamiento de la institucionalidad, rechazo a FFAA paralelas, reafirmación del camino político y no insurreccional; plena vigencia del Estado de Derecho, etc. Para abordar estos problemas Salvador Allende propuso la formación de comisiones conjuntas entre las partes, las que elaborarían las fórmulas concretas de acuerdo que serían definitivamente resueltas entre él y la directiva DC.

Esta, sin embargo, no aceptó el punto de vista del Primer Mandatario por considerarlo dilatorio. Estimó que las nuevas normas legales y constitucionales propuestas por el Presidente requerirían para su estudio varios meses, sin que de por medio hubiera una tregua política ni garantía alguna de que finalmente se llegaría a acuerdo. La DC sostuvo que la posición del

Ejecutivo constituía más bien un recurso que buscaba ganar tiempo. Ante ello declaró cerrado el diálogo.

Luego se reunió el Consejo Nacional de la colectividad, el que respaldó la gestión de Patricio Aylwin y reiteró que no se reabrirían las conversaciones con el gobierno mientras no se incluyera a las FFAA en el gabinete. A la par el PDC declaró su decidido apoyo a la huelga de los transportistas, negando que ésta tuviese como fin abrir paso a un golpe de Estado.⁷⁴ De tal modo, el diálogo terminó fracasando.

II

Desde el fracaso de las conversaciones entre la DC y el gobierno hasta el golpe militar

1. Allende forma un nuevo gabinete con participación militar.

Las Posiciones de la Izquierda

Ante el fracaso del diálogo con el PDC y ante la eventualidad de un golpe de Estado, Salvador Allende hizo un gran esfuerzo político dirigido a asegurar la lealtad de las FFAA y a afianzar la autoridad del gobierno. Con tal propósito procedió a reestructurar el gabinete y a formar otro con participación militar, aunque sin excluir a la UP, como implícitamente lo había pedido la Democracia Cristiana. El 8 de agosto renunciaron los ministros del gabinete anterior y al día siguiente juraron los nuevos. Entre ellos figuraban en Defensa, Carlos Prats; en Hacienda, el Almirante Raúl Montero; en Obras Públicas y Transportes, el General del Aire Cesar Ruiz; y en Tierras y Colonización, el Director General de Carabineros, José Sepúlveda.

Esta fórmula no dejó de provocar sorpresa al interior del alto mando del Ejército, dentro del cual inicialmente se creyó que la incorporación de los militares al gabinete se haría de acuerdo a la fórmula DC, es decir, excluyendo a la UP.⁷⁵ Situación similar ocurrió en el alto mando de la FACH.⁷⁶ Lo que en definitiva los militares no deseaban era aparecer avalando el proyecto y la gestión de la Unidad Popular. Esto ciertamente no dejaba de trasuntar una actitud cada vez más contraria al gobierno.

A juicio de Salvador Allende, la integración de los militares al gabinete contribuiría a asegurar la lealtad de las FFAA y, por tanto, a afianzar la autoridad gubernativa.⁷⁷ Sin embargo, consideró que para asegurar del todo el cumplimiento de estos objetivos era indispensable a lo menos resolver dos cuestiones más. La primera consistía en poner fin a la notoria y creciente desobediencia civil, cuyo núcleo estaba constituido por el paro de los transportistas. La segunda, en llamar a retiro a ciertos generales en virtud

de que serían partícipes de claras conspiraciones y deliberaciones antigubernamentales. En tal sentido, el Presidente pensaba que la disyuntiva era clara: o se imponía la autoridad del gobierno al interior de los cuarteles, o venía el golpe. Bajo esta premisa, la idea era llamar a retiro a los generales Bonilla, Nuño, Baeza, Arellano, Palacios y Torres de la Cruz.⁷⁸

En relación al paro de los dueños de camiones, Salvador Allende intentó quebrarlo nombrando interventores militares y aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero aún así, la resistencia de los transportistas se mantuvo, apoyados ahora por una huelga de la locomoción colectiva y por variadas acciones de solidaridad, aparte del activo respaldo de los partidos opositores.

Frente a ello la Unidad Popular impulsó considerables movilizaciones de sus adherentes. El mismo día en que se conformó el nuevo gabinete se llevó a cabo un paro nacional ordenado por la CUT, que culminó en una gigantesca manifestación en apoyo al gobierno, y en particular al nuevo equipo ministerial. Este fue considerado por el grueso de la UP como un sólido dique de contención frente a los intentos golpistas que se le atribuían a los partidos opositores.

En todo caso, en la izquierda no hubo unanimidad frente a las recientes medidas políticas adoptadas por el Presidente de la República. En efecto, si bien en la mayoría de sus partidos primó el apoyo al nuevo equipo ministerial, en otros, dentro y fuera de la UP no dejaron de manifestarse críticas.

El PC y PS estuvieron entre los primeros. En declaración conjunta respaldaron al nuevo gabinete, asignándole antes que nada la función de contribuir al cumplimiento del programa de la UP. Ambas colectividades expresaron a la vez su confianza en la conjunción entre el movimiento popular y «el cumplimiento de sus deberes constitucionales por las Fuerzas Armadas y Carabineros», lo que, a su juicio, debía desalentar «al golpismo derechista» e imponer «un clima de autoridad y respeto», que permitiría el despliegue de «la fuerza creadora y productiva de los trabajadores.»⁷⁹

El PR, por su parte, valoró la integración de las FFAA al nuevo gabinete, interpretándola como una colaboración institucional con el Ejecutivo.⁸⁰ La IC y el MAPU-OC hicieron lo propio.

Sin embargo, el MAPU de Garretón planteó una posición claramente discordante. Sostuvo que el gabinete cívico militar no resolvía los problemas existentes sino que, por el contrario, los agravaba. La clase trabajadora, a juicio de esta colectividad, tenía por sí misma fuerzas suficientes como para hacer «retroceder al fascismo», impedir el golpe, -fuese este «legal o ilegal»- y liquidar los paros patronales. En el gobierno, sostuvo el MAPU, hay fuertes tendencias a la transacción, pretendiéndose evitar el

golpe a través de variadas concesiones y vulnerando aspectos importantes del programa de la UP.⁸¹

El MIR no fue menos categórico. Caracterizó el cuadro político señalando que «los reformistas», predominantes en el Ejecutivo, habían impuesto un «gabinete de capitulación», lo que provocaría la división de la izquierda y del pueblo. El MIR coincidió con el MAPU de Garretón en el sentido de que la línea predominante en el gobierno intentaba una política defensiva por la vía de hacer «concesiones a las clases patronales».⁸²

Como puede verse, el «Polo Revolucionario» no presentó una posición común frente a la cuestión del nuevo gabinete. El PS, en efecto, se alineó junto al PC. Dejando de lado las presiones del propio Salvador Allende, que siempre clamaba por la unidad entre comunistas y socialistas, ello se explica por la misma razón señalada en capítulos anteriores. Es decir, en ciertas coyunturas críticas, cuando el PS consideraba que se estaba al borde del inevitable enfrentamiento decisivo, pensaba que era indispensable aunar fuerzas con el PC, configurando lo que se definía como «unidad de la clase obrera». Ello, por cierto, no suponía que el PS renunciara a su política rupturista, ni el PC a su estrategia gradualista.

Dentro del cuadro descrito, una cuestión que pasó a preocupar de sobre manera a toda la izquierda, y al propio Presidente de la República, fue la referente a la aplicación de la Ley sobre Control de Armas por parte de los militares. De hecho esta ley estaba siendo utilizada contra los distintos sectores de la izquierda, más precisamente aún, contra las agrupaciones laborales que constituían sus principales bases de apoyo. En el mes de julio el MIR había calificado a la Ley de control de Armas como una «nueva ley maldita», en referencia a la que proscribiera al PC en 1948.

Toda la izquierda comenzó a pedir que se derogara o bien se modificara el contenido de este cuerpo legal. La exigencia se hizo mayor luego del 5 de agosto, cuando un operativo militar dirigido contra la empresa Lanera Austral, de Punta Arenas, dejara como saldo un obrero muerto y múltiples destrozos. Las condiciones políticas, sin embargo, no permitían ni remotamente que las demandas izquierdistas sobre este punto pudieran llevarse a la práctica. En tal situación, no pocos vieron en la aplicación de esta ley el comienzo del golpe militar.

1.2 Diagnóstico de la Oposición frente al nuevo gabinete: el gobierno se parapeta tras las FFAA.

En la oposición el nuevo gabinete fue visto como una audaz manobra del gobierno destinada a parapetarse tras las FFAA. Para la DC, en todo caso, la situación era un tanto más complicada que para la derecha por

cuanto en su reciente diálogo con el Presidente Allende había exigido se nombrara un gabinete con fuerte participación de uniformados. Lo que el Primer Mandatario había procedido a hacer era, si no lo mismo, por lo menos algo formalmente aproximado, aunque por su contenido totalmente distinto, precisamente porque no había procedido a excluir a la UP del gobierno. Esto era lo que la DC requería hacer ver a la opinión pública.

El 8 de agosto, a través de una declaración oficial, el PDC caracterizó al nuevo gabinete como una fórmula insuficiente «en tanto no llenaba los requerimientos de real participación de las FFAA en todos los niveles del Ejecutivo con el fin de asegurar la vuelta a la normalidad institucional.⁸³ Es decir, el PDC rechazó la solución ministerial implementada por Salvador Allende en virtud de que no implicaba la materialización de la única salida política que ella consideraba adecuada para la situación, a saber, el efectivo control del gobierno por parte de los militares.

No es menos cierto que al día siguiente esta colectividad emitió otra declaración, en la cual dijo valorar positivamente al nuevo gabinete bajo la condición de «que los ministros (militares)» recibieran el apoyo «de los distintos niveles administrativos» y se verificara una «prescindencia de los partidos políticos oficialistas en las medidas que se adopten para restaurar el orden».⁸⁴ De tal modo, se reiteraba la misma tesis sobre la necesidad de verificar el desplazamiento de la UP de las decisiones de gobierno en beneficio de los uniformados.⁸⁵

Junto con estas definiciones, el PDC continuó apoyando decididamente el paro de los transportistas y culpando al gobierno por su prolongación.

Mientras tanto, el PN, a través de su presidente, Sergio Onofre Jarpa, sostuvo que el nuevo gabinete representaba una mascarada. Ello, según el personero, en virtud de que los chilenos habrían estado esperando de las FFAA una acción rectificadora, y no que avalaran una gestión gubernamental que, según este partido, había transgredido reiterada y gravemente la Constitución.⁸⁶ El mismo día que Jarpa emitía estas declaraciones, el PN hizo un llamamiento público convocando a la ciudadanía a llevar a cabo una paralización general en protesta “contra la prepotencia del gobierno” y en apoyo a los gremios en conflicto. Al mismo tiempo la colectividad reiteró su apoyo a las FFAA “en el cumplimiento cabal de la ley del control de armas”.⁸⁷

De tal modo, el pronunciamiento de cada partido opositor sobre el nuevo gabinete era absolutamente funcional al tipo de salida política que propugnaba: copamiento del gobierno desde su interior por los militares, para la DC; intervención militar rectificadora, apoyada en la movilización de la sociedad civil, lo que incluía la neutralización de los núcleos obreros izquierdistas mediante la ley de control de armas, para el PN. Lo anterior

sea dicho sin desconocer que existían elementos políticos que eran funcionales a ambas salidas.

2. Continuación de los atentados terroristas

La señalada evolución del cuadro político se verificó en el contexto de una notoria ampliación de los atentados terrorista y de la violencia que conmovía al país.

En efecto, el día 8 de agosto en Curicó una explosión voló 30 metros de oleoducto de ENAP, dejando cuantiosos daños materiales y varios heridos graves. También, el mismo día, estallaron bombas en Rancagua, en la casa del diputado comunista Vladimir Chavez, y en Temuco, en el domicilio del dirigente socialista Armando Jobet.⁸⁸ "El Mercurio" del 9 de agosto informó sobre un comando de Patria y Libertad, que procedió a asaltar la Radio "El Conquistador" para leer una proclama anti gobiernista.⁸⁹ El 13 fue dinamitada una torre de alta tensión, como producto de lo cual quedó a oscuras por más de una hora el territorio comprendido entre La Serena y Rancagua. El apagón se produjo justo en los momentos cuando el Presidente de la República se dirigía al país por cadena de radioemisoras.⁹⁰ El mismo día Patria y Libertad entregó una declaración desde la clandestinidad en la cual sostuvo que la tregua que había declarado en los días anteriores llegaba a su término y que iniciaba nuevamente acciones "contra los enemigos de Chile".⁹¹ El 16 de agosto la prensa informaba sobre tres atentados con explosivos en residencias de funcionarios de la Embajada de los EEUU.⁹² La ARCHI, también el día 16, emitió una declaración denunciando una serie de atentados producidos contra diversas radioemisoras.⁹³ El 18, en Concepción, 70 militantes del MIR ingresaron a los estudios de Radio Talcahuano y leyeron una proclama exigiendo la libertad de cierta cantidad de marineros que habían sido detenidos y acusados de conformar una célula extremista.⁹⁴ El 19 un nuevo atentado contra torres de alta tensión dejó sin luz por trece horas a la provincia de Ñuble.⁹⁵ El 21 se produjo un atentado contra la sede de la CUT Provincial Santiago, la que se incendió. El fuego alcanzó también a dos sedes anexas del PDC.⁹⁶

A mediados de agosto el Consejo de Gabinete emitió una declaración en la que se hacía un recuento de los atentados terroristas del último tiempo. Estos, según la declaración, sumaban 253, los que habían dejado cinco muertos, más de cien heridos y numerosos daños a la economía.⁹⁷

Como lo reconociera después Roberto Thieme, jefe operativo de patria y Libertad, tales acciones terroristas eran de la autoría de esta organización, con apoyo del sector del ejército que planificaba el golpe de Estado.⁹⁸

A esas alturas, por tanto, el conflicto con largueza había superado

los marcos institucionales. Los esfuerzos de Salvador Allende por reponer dichos marcos con el fin de que la lucha política se desarrollara dentro de ellos se volvían inútiles.

3. Nuevos roces entre la izquierda radical y las FFAA

La precaria situación política en la que fue quedando la UP se vio agravada por un hecho adicional. Este consistió en una acusación de la Armada en contra de Carlos Altamirano, Oscar Guillermo Garretón y Miguel Enriquez fundamentada en el hecho de que estos personeros habrían sostenido reuniones con grupos de la marinería. A partir de aquí la oposición rupturista solicitará el desafuero parlamentario de los dos primeros, a la par que la Armada procedía a detener a alrededor de cien marineros.

Con posterioridad, en un discurso pronunciado el 9 de septiembre de 1973, Carlos Altamirano reconoció haberse reunido con tropa y suboficialidad de la Armada, aunque -dijo- a invitación de estos y a los fines de recepcionar denuncias sobre actividades golpistas en la oficialidad.⁹⁹

La prensa de derecha sostuvo que los marineros, luego de ser detenidos, reconocieron haber recibido órdenes de Altamirano, Garretón y de Miguel Enriquez.¹⁰⁰ El PS, sin embargo, respondió que tales declaraciones habían sido obtenidas bajo tortura, por lo que carecían de validez.¹⁰¹ Por su parte, los marineros, en carta al Presidente Allende, negaron haber inculcado a ningún dirigente de izquierda, al tiempo que denunciaron ser objeto de permanentes apremios ilegítimos. El PS, junto a otros sectores de izquierda, procedió entonces a llevar a cabo una intensa campaña de solidaridad con los detenidos. Así, a fines de agosto se conformó un Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los procesados y se reiteró las denuncias sobre torturas.¹⁰²

Por su parte el MIR desplegó ingentes esfuerzos propagandísticos especialmente dirigidos hacia la tropa de las distintas ramas de las FFAA en particular colocando afiches y repartiendo panfletos en las cercanías de los cuarteles, llamando a la democratización de las instituciones militares y a la no obediencia, por parte de los soldados, ante las ordenes de los «oficiales golpistas» en la eventualidad de que estos se decidieran a actuar.

Mientras tanto, la orientación del PC en torno a este problema era totalmente distinta. En lo esencial intentaba no dar pie a ningún desborde militar, fortaleciendo a los mandos constitucionalistas mediante el asentamiento del principio de autoridad del gobierno y del orden legal, no proporcionando en este terreno ningún pretexto a los militares partidarios de una intervención. Sin perjuicio de ello, cuando la Corte de Apelaciones se dispuso a examinar la petición de desafuero contra Carlos Altamirano y

Oscar Guillermo Garretón, que había sido presentada por el PN con motivo de los sucesos de la Armada, el PC solidarizó con los mencionados dirigentes, acusando a la vez a la derecha de querer romper la disciplina de los instituciones castrenses.¹⁰³

4. Fines de agosto: la izquierda ya está derrotada

A la altura de la segunda mitad de agosto la izquierda, en lo esencial, ya estaba derrotada. Ninguna de sus líneas, ni la gradualista institucional ni la rupturista, eran ya factibles. A menos que se modificara alguna de las variables principales del escenario político, lo que era extraordinariamente improbable.

La estrategia gradualista se había vuelto inviable a lo menos en virtud de los siguientes factores.

1) Porque la DC se había inclinado por poner fin a corto plazo al gobierno de la UP, contribuyendo así a dejar a la izquierda en un aislamiento total y sin capacidad alguna de maniobra en el plano institucional;

2) Porque las FFAA, ante la profundidad de la crisis, se inclinaban por intervenir, siendo crecientemente sensibilizadas por el discurso opositor, en particular por el de la derecha, el que tenía presupuestos similares a los de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que desde los sesenta había comenzado a difundirse en los cuarteles. Ciertamente que no era posible vía institucional alguna sin el apoyo de una fuerza militar dispuesta a respaldar a la autoridad civil y al orden legal. Precisamente una fuerza tal estaba dejando de existir.

3) Porque, en razón de lo anterior, el gobierno no tenía capacidad de constreñir a la oposición extrema, a través de los aparatos coercitivos del Estado, a actuar dentro de los marcos constitucionales.

4) Estaba derrotada también en virtud de que, en una fase de la lucha en la que ineludiblemente se requería unidad de acción e identidad de miras, no existía coherencia política en la UP y en la izquierda. Ello en razón de que el rupturismo izquierdista atentaba contra la estrategia institucional del Presidente Allende, impidiéndole imponer sus términos y otorgar confianza a la mayoría ciudadana y al centro político sobre la sinceridad de su empeño.

5) Y, en fin, vista desde una perspectiva más amplia, fracasaba también por una falta de teoría sobre la vía que proponía.¹⁰⁴

Por su parte, la política del polo revolucionario nunca tuvo factibilidad. Ello por cuanto su hipotético éxito hubiera requerido del apoyo de un sector de las FFAA, puesto que un poder popular abandonado a sus solas e incipientes fuerzas militares habría sido impotente frente al ejér-

cito estatal, profesional y altamente cohesionado. Pero el apoyo de a lo menos un sector de las FFAA a una alternativa de transformación anticapitalista, además de otras premisas, sólo era posible si tal alternativa lograba contar con la legitimidad que le proporcionaba la institucionalidad, es decir, si correspondía a una política como la del polo gradualista.

La expectativa de que la cuestión militar se resolviera mediante una división de las FFAA en virtud de la maduración de una crisis revolucionaria, como lo esperaba el MIR, no correspondía a la realidad chilena, sino más bien al esquema bolchevique de 1917. Allí, como es sabido, todas las instituciones se deshicieron bajo el impacto de la guerra, incluyendo las militares. A ello agréguese el hecho de que en Rusia de 1917 los estratos dirigentes no disponían de una hegemonía sobre las clases subalternas. En Chile no se daba ninguno de esos rasgos. No existió una guerra que demoliera las instituciones civiles ni militares, ni los grupos dirigentes «burgueses» carecían de hegemonía sobre los subalternos, o mejor dicho, sobre un sector importante de ellos. Esto último, entre otras razones, permite explicar el por qué la izquierda no fue capaz de ganar a la mayoría del país. Aún más, la cohesión de las FFAA en gran medida era el resultado de la mencionada capacidad hegemónica de los grupos dirigentes. De allí que, en fin, la política del polo revolucionario careciera de toda viabilidad, no viniera al caso de las realidades nacionales y fuera más bien la ortodoxia misma. Por tanto, no tenía ninguna chance real.

De tal modo, en agosto de 1973, las dos líneas que coexistían en la izquierda habían fracasado. ¿Qué mantenía entonces al gobierno de Salvador Allende? En lo fundamental las cúpulas constitucionalistas de las FFAA, en rápido proceso de aislamiento al interior de las instituciones castrenses.

En virtud de lo anterior es que se puede decir que en agosto la oposición en lo esencial ya había ganado la lucha. Había logrado que el gobierno de la UP perdiera su factibilidad práctica. A esas alturas, en efecto, lo que quedaba por visualizar era por un lado, cuanto durarían al frente de las FFAA los mandos constitucionalistas que hacían posible la mantención del gobierno de la UP, y por el otro, cuál de las dos alas opositoras impondría su solución al conflicto e implementaría su proyecto.

5. La ofensiva final

Durante la segunda mitad de agosto de 1973, estando la UP prácticamente aislada y derrotada, quedaban, no obstante, tres cuestiones pendientes para producir el desenlace: 1) remover a los elementos constitucionalistas de las posiciones claves que disponían al interior de las instituciones armadas, en especial en el Ejército;¹⁰⁵ 2) producir una situa-

ción lo más cercana posible a una cobertura legal que permitiera a los eventuales nuevos mandos militares deponer "legítimamente" al gobierno; y 3) todo favorecido por un marco de ingobernabilidad generado desde la sociedad civil que permitiera sostener que la deposición del gobierno contaba no sólo con una base jurídica, sino que también se asentaba en el sentir de la comunidad nacional.¹⁰⁶ Estas fueron las cuestiones a las cuales, con toda su energía, se abocó entonces la oposición, enfrentándolas y resolviéndolas casi simultáneamente a través de una verdadera ofensiva final.

5.1 El asedio a las FFAA

En agosto de 1973, tanto para la DC como para la derecha la persona del Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, constituía un serio obstáculo -quizás el principal- para la implementación de sus respectivas salidas políticas. No es extraño entonces que sobre él se desatara una serie de presiones, fuesen encubiertas o bien enteramente públicas. Tales presiones contribuirán a su aislamiento y a su posterior renuncia al mando del Ejército.

Para la DC la figura del Comandante en Jefe del Ejército había dejado de ser confiable. En razón de ello personeros de este partido, a través de sutiles procedimientos, trataban de socavar su posición. Al respecto, en sus Memorias Carlos Prats relata que a mediados de julio de 1973 recibió cierta información confidencial de parte de Miguel Enriquez, la que a su juicio tenía «evidentes bases de verosimilitud»¹⁰⁷. En ella se señalaba que Sergio Ossa estaba "encargado por la DC de predisponer a la oficialidad media contra el gobierno...; que Ossa expresaba entre los demócrata cristianos, que la insubordinación contra Prats era casi unánime y que no le quedaba sino el camino de retirarse...; que en la DC se opinaba que no se podía tener confianza en Prats".¹⁰⁸

Las actividades subrepticias provenientes de la oposición extrema eran aún más audaces. Al respecto, el General Prats relata el siguiente episodio, fechado a comienzos del mes de julio de 1973. «Recibo a Alvaro Puga, el conocido periodista de oposición, quien me trae una cinta gravada de la conversación que el 29 de junio sostuvo el coronel Rubio conmigo -desde su oficina a mi automóvil...Me deja la cinta. Espera mi comentario, pero yo no le expreso opinión alguna, porque comprendo que ha querido «pasarme el aviso» de que la extrema derecha controla nuestras comunicaciones militares».¹⁰⁹

Pero los desencuentros entre los partidos opositores y el Comandante en Jefe del Ejército pasaron también a expresarse abiertamente. El conflicto entre Prats y el PDC se explicitó con toda claridad a mediados de

agosto, a propósito del paro de los transportistas. Entonces, la DC, a través de una declaración de sus senadores, sostuvo que el general Prats «en su carácter de Ministro de Defensa», había «asumido el papel de colocar a las FFAA en una acción ilegal al servicio de la represión en contra de los trabajadores del transporte, que sólo (estaban) exigiendo el cumplimiento de una palabra de honor empeñada». La declaración terminaba diciendo que, ante las acciones que implementaba el gobierno en contra del movimiento, la DC responsabilizaba «al señor Ministro de Defensa de lo que (pudiera) ocurrir».¹¹⁰

De otra parte, la incorporación de las cúpulas de las FFAA al gabinete el nueve de agosto había dado la oportunidad para serios roces entre los mandos militares y los partidos opositores. La derecha puso en duda el que tal participación representara el sentir de los institutos armados como tales. Y la oposición en general coincidió en que lo que estaba en curso no era otra cosa que una utilización de los uniformados por parte de la UP.

En entrevista concedida a «El Mercurio», publicada el 14 de agosto de 1973, el Presidente del Senado, Eduardo Frei, sostuvo que la participación de los Comandantes de las instituciones armadas en el gabinete tenía un carácter distinto a la de octubre del año anterior. Ahora, según Frei, los militares aunque no lo quisieran, se comprometían en una gestión de gobierno. Su acción ministerial -agregó Frei- sería limitada y carente de eficacia en virtud de que las carteras claves seguían en manos de representantes de la UP, los que llevarían a cabo un esquema político contrario a la voluntad de la mayoría del país.¹¹¹

El PN fue más explícito aún cuando sostuvo que ignoraba si los jefes militares consultaron a sus respectivas instituciones antes de aceptar los cargos ministeriales, o si sólo se trató de una resolución personal. Esto último -sostuvo- «significaría un distanciamiento entre los altos mandos y las instituciones mismas». El PN afirmó además que el gabinete con participación militar servía a la finalidad de confundir a los chilenos y encubrir así «el avance comunista».¹¹²

En el intertanto, y en clara conexión con el desarrollo de los acontecimientos políticos, al interior del Ejército la situación del Comandante en Jefe, Carlos Prats, empeoraba. El tipo de percepciones que crecientemente predominaban dentro de las filas, se distanciaban cada vez más de las que él tenía. Ello se manifestó en múltiples cuestiones que surgían cotidianamente. Las Memorias del entonces Comandante en Jefe del Ejército proporcionan abundante información sobre el punto, entre la cual seleccionamos la siguiente.

A comienzos de julio -señala Prats-, «el Auditor General de Guerra, General Osvaldo Salas, me da su increíble opinión personal, en cuanto a la

inconveniencia de que la Justicia Militar abra un proceso a «Patria y Libertad», movimiento que reconoció públicamente haber promovido el motín del Batallón Blindado 2, con lo que se confesaba culpable del delito de sedición».¹¹³

En otra observación, también correspondiente a la primera parte de julio, Prats acota que «el S.I.M. desde hacía varios meses sólo trabajaba los antecedentes que recogía sobre el extremismo de izquierda, pero no daba a conocer los movimientos del extremismo de derecha. Prueba evidente de ello -continúa- era que el amotinamiento del blindado pasó inadvertido para el SIM, estando comprometido «Patria y Libertad».¹¹⁴

En relación al mes de agosto, más allá de los desencuentros y opiniones sobre la conformación del gabinete con participación militar, Prats en sus Memorias da una serie de referencias sobre la identificación de ciertos altos mandos con el movimiento de los Dueños de Camiones. «El Jefe subrogante de la Armada, Almirante Merino, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Almirante Carvajal, -señala el relato- se manifiestan preocupados ante la inminencia de que los interventores de las FFAA tengan que disponer la requisición de los camiones en paro. Coinciden en señalar que el conflicto de los transportistas es delicado, porque consideran que tiene justificación».¹¹⁵ Más adelante Prats hace la siguiente reflexión: «Pienso en la curiosa postura de ambos almirantes: mientras no vacilan en realizar con máximo rigor el allanamiento de industrias e instalaciones públicas controladas por la UP -en virtud de la Ley de Control de Armas- sienten el “temor reverencial” de aplicar los mismos procedimientos a los elementos de la oposición lanzados en un paro de gravísimas consecuencias para la economía nacional. Tienen temor, pese al respaldo legal que les da la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y Prats finaliza: “me limito a responderles, sin mayores comentarios, que se atengan a lo ordenado”».¹¹⁶

Las tensiones derivadas de estas distintas sensibilidades no afectaban sólo a Prats, sino también a otros oficiales de su confianza. Sobre esta cuestión en sus Memorias el entonces Comandante en Jefe del Ejército relata lo siguiente: «el general Pickering me expresa que los generales Bonilla y Araya le han sugerido que se retire del Ejército, «porque tiene mal ambiente». Pickering -continúa el relato- está dispuesto a retirarse, pues no desea constituirse en un nuevo factor de conflicto para mí dentro de los graves problemas que, a diario, estoy enfrentando».¹¹⁷ Y así sucesivamente.

En resumen, entre los meses de julio y agosto de 1973 se había generado un claro ambiente adverso al Comandante en Jefe del Ejército en el interior de su institución derivado de distintos enfoques sobre la cuestión política.

En tal contexto, se desató finalmente una serie de acciones que cul-

minaron con su renuncia. Dichas acciones se llevaron a cabo a través de las esposas de los uniformados. En tal sentido, al intervenir las mujeres como punta de lanza de una operación mayor, se reproducía aquel patrón de acción opositor que se había utilizado exitosamente en el plano nacional, cuya expresión más importante fuera la «marcha de las cacerolas vacías», en diciembre de 1971.

Las mujeres de los uniformados empezaron a movilizarse abiertamente a propósito de la renuncia del General Ruiz a la jefatura de la Fuerza Aérea. El 18 de agosto frente a La Moneda se produjo una manifestación de esposas de oficiales de la FACH que pedían hablar con Allende y expresar su malestar por «la expulsión» del General Ruiz del mando esta institución. El 20, durante todo el día, la situación se repitió, aunque frente al Ministerio de Defensa. Las manifestantes gritaban «¡Viva Ruiz. Abajo Prats y Montero!» Es decir, la manifestación se canalizaba en contra de los principales mandos constitucionalistas de las FFAA.¹¹⁸

El 21 de agosto la manifestación de esposas de oficiales de las FFAA se reprodujo, esta vez frente al domicilio particular del propio general Prats. Allí alrededor de 300 mujeres, «entre ellas varias esposas de generales y jefes en servicio activo y en retiro»,¹¹⁹ entregaron una carta a la esposa del Comandante en Jefe del Ejército en la cual expresaban su sentir, así como también «la angustia y rebeldía» de sus maridos, ante la situación que vivía el país y las propias instituciones militares.¹²⁰ Rápidamente a la manifestación se unió una importante cantidad de personas de ambos sexos, que llegarían a unas 1500, incluyendo a un par de oficiales en uniforme, todos los cuales expresaron airadamente su rechazo a Prats, incluso apedreando las ventanas de su residencia.¹²¹

El Comandante en Jefe del Ejército estuvo dispuesto a obviar el incidente a condición de que el cuerpo de Generales le manifestara públicamente su respaldo. Convocados para estos efectos, sin embargo, con la excepción de una pequeña minoría, los generales no estuvieron dispuestos a responder favorablemente la solicitud. En esa situación, los generales Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering, a cargo de las unidades más fuertes de Ejército -la II División y el Comando de Institutos Militares- presentaron su renuncia ante Prats, aduciendo la dificultad para «responder de la disciplina de cuerpos de tropa (cuya) oficialidad media y subalterna está claramente perturbada por la acción psicológica que la oposición ha llevado ya al paroxismo».¹²²

Ante su situación de total aislamiento dentro del Ejército, al General Prats se le presentaron dos opciones: o llamar a doce o quince generales a retiro y precipitar con ello el riesgo de una guerra civil, o bien renunciar. Esta última fue la opción por la cual finalmente se inclinó, esperando que

su sucesor, con menos anticuerpos en la institución, lograría impedir que esta se embarcara en una intervención que depusiera al gobierno.

El Presidente de la República procedió entonces a nombrar como Comandante en Jefe del Ejército a la antigüedad siguiente, el general Augusto Pinochet, quien era identificado como un oficial constitucionalista, de plena confianza de Prats, quien en virtud de lo mismo lo había recomendado para el cargo. El nuevo Comandante en Jefe, pues, debía materializar el llamado a retiro de ciertos generales que aparecían comprometidos en deliberaciones conspirativas, calmando la situación al interior del Ejército, proporcionando el tiempo necesario con el fin de buscar algún tipo de acuerdo con la DC orientado al propósito de estabilizar la situación del país.

Sin embargo, el general Pinochet, en su fuero interno, veía las cosas en otra perspectiva. Según señala en su libro «El Día Decisivo», desde comienzos de 1972, cuando asumiera como Jefe de Estado Mayor, había comenzado a pensar en la estructuración de un plan orientado a ejecutar un golpe de Estado. En agosto de 1973 ese plan, desarrollado en el más riguroso secreto, estaba totalmente finiquitado y requería para ser puesto en práctica de la remoción de los mandos constitucionalistas del Ejército.¹²³ Eso fue lo que precisamente quedó resuelto el día 23 de agosto con la renuncia de los generales Prats, Pickering y Sepúlveda. En seguida, se verificó un rápido desplazamiento de oficiales de menor jerarquía con el propósito de garantizar el control total sobre la institución por parte de los mandos golpistas, evitándose así cualquier posibilidad de disensiones frente a las medidas futuras.¹²⁴

Entonces quedó superado el principal obstáculo que subsistía para operar el desenlace del conflicto político por la vía de una intervención militar.¹²⁵ Casi simultáneamente se resolvería otro de los elementos que facilitaría las cosas para que ello ocurriera, a saber, la solicitud por parte del Congreso a los jefes de las FFAA, partícipes en el gabinete, en orden a que intervinieran produciendo una rectificación en vista de que el gobierno se encontraría fuera de la legalidad y el orden constitucional.

5.2 La conformación del Marco Jurídico: el pronunciamiento del Congreso

El 22 de agosto fue aprobado en la Cámara Baja del Congreso Nacional un proyecto de acuerdo presentado por los diputados demócrata cristianos José Monares, Baldemar Carrasco, Gustavo Ramirez, Eduardo Sepúlveda, Lautaro Vergara, Arturo Frei y Carlos Sívori. El proyecto fue también co-patrocinado por los Diputados nacionales Mario Arnello, Mario Ríos y Silvio Rodríguez.

El documento sostenía que el Ejecutivo había hecho de las violaciones a la Constitución y a la Ley «un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del estado, de violar habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y de permitir y amparar la creación de poderes paralelos ilegítimos». Se le acusaba también, entre otras cosas, de negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las áreas de la economía aprobada en el Parlamento.

En base a esas y otras consideraciones de similar tenor, el proyecto proponía acordar lo siguiente. Primero: «Representar al Señor Presidente de la República y a los señores ministros de Estado, miembros de las FFAA y del cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos.

Segundo. Representarles asimismo que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones de que son altos miembros, y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la constitución y las leyes a fin de encauzar la acción gubernativa por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos.

Tercero. Declara que si así se hiciera, la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la república. En caso contrario, comprometería gravemente el carácter nacional y profesional de las FFAA y del cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y grave deterioro de su prestigio institucional.

Cuarto. Transmitir este acuerdo al Señor Presidente de la República y a los señores ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes, y Tierras y Colonización». ¹²⁶ Es decir, aparte de al Presidente de la República, el acuerdo sugestivamente iba expresamente dirigido a los ministros militares.

En el fondo la decisión política aquí involucrada no consistía en otra cosa que en solicitar a estos últimos, en tanto jefes máximos de sus respectivas instituciones armadas, intervinieran encaminando la acción gubernativa dentro de determinados cauces. De tal modo, se asume que serían los militares, desde el mismo interior del gobierno, quienes deberían tomar la responsabilidad de lo que se consideraba una indispensable rectificación política por parte del Ejecutivo.

Como puede verse, tales puntos de vista correspondían al tipo de salida al conflicto político que venía propugnando la DC, puesto que se les pedía a los Jefes máximos de las FFAA y Carabineros, representadas en el ministerio, su intervención, pero manteniendo formalmente el orden constitucional, y, más aún, asumiendo que ello implicaría la restauración de este.

Pero, de otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo en modo alguno obstaculizaba la salida que buscaba la derecha por cuanto, al dar por sentada la ilegalidad del gobierno y al definir a los jefes de las FFAA en el ministerio como los garantes de una rectificación, en algún grado también validaba implícitamente una acción de otro tipo.¹²⁷

De tal modo, la oposición sentó lo que consideraba era una base de legitimación jurídica para la remoción del gobierno de la UP a través de la intervención de las FFAA, culminando así el cerco de todos los elementos del Estado sobre el Ejecutivo.

5.3 El movimiento de la Sociedad Civil: con notable simultaneidad las gremios opositores demandan la renuncia de Salvador Allende

El diseño político opositor se completaba con el cerco al gobierno desde la sociedad civil. La acción estaba articulada en torno a la huelga de los transportistas. Ella debía catalizar -como antes lo había hecho el movimiento de El Teniente y la lucha contra la ENU-, una amplia movilización social contra el Ejecutivo, la que en esta oportunidad llegó a estar orientada hacia un paro nacional indefinido en cuyo marco debía producirse el desenlace. Dentro de esa lógica las organizaciones involucradas fueron transitando gradualmente desde las reivindicaciones gremiales a las políticas, expresadas finalmente en la demanda abierta en torno a la renuncia del presidente Allende.

El paro de los transportistas era muy fuerte, no sólo en virtud de las condiciones subjetivas de sus protagonistas, sino también debido al considerable apoyo financiero externo con que contaba, lo que incluso se había traducido en una baja del precio del dólar en el mercado informal. Cuando el gobierno decretó la reanudación de faenas, esta en ninguna parte fue acatada por los huelguistas. Los interventores militares tampoco obtuvieron mayor éxito.

De otra parte, el paro contó con el activo apoyo de los partidos opositores, quienes intentaron deslegitimar las iniciativas gubernativas en su contra. Así, la DC, al día siguiente de que el gobierno decretara la reanudación de faenas y nombrara interventores militares, declaró: «no toleraremos enfrentamientos entre soldados y transportistas a consecuencia de una maniobra política de la UP». Agregó que la colectividad utilizaría todo su poder constitucional, legal y gremial para impedir cualquiera represión contra el movimiento y que impulsaría el enjuiciamiento de las autoridades

que incurrieran en ello.¹²⁸

Simultáneamente, ante la posibilidad de requisición de camiones por parte de los interventores militares en aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, se produjo una reacción en cadena de las organizaciones gremiales en las que tenía influencia la oposición. La Confederación de Colegios Profesionales ese mismo día llamó a apoyar a los transportistas y señaló que era necesario adoptar medidas efectivas de solidaridad, como lo era un paro nacional indefinido.¹²⁹ Declaraciones en similares términos hizo SODECO.¹³⁰ A estas organizaciones se sumó un considerable número de entidades gremiales que representaban a las clases medias y a los pequeños y medianos empresarios, sectores que muy mayoritariamente mostraban una fuerte voluntad de lucha contra el gobierno.

La resistencia masiva de tales estratos no dejó de influir en los militares, al punto de generar una crisis de gabinete a través de la renuncia del Ministro y General del Aire Cesar Ruiz Danyau, quien argumentó su decisión haciendo ver el fracaso de las iniciativas que como ministro le había correspondido llevar a cabo para resolver el paro. El Presidente Allende, una vez frustrado en sus intentos por persuadirlo para que reconsiderara su decisión, junto con aceptarle la renuncia le pidió además que pusiera a su disposición el cargo de Comandante de la Fuerza Aérea. Ello generó cierta crisis en esta rama de la Defensa Nacional, donde hubo conatos de resistencia y deliberación, que debió enfrentar y conjurar el nuevo comandante, Gustavo Leigh. En todo caso, cuando este asumió el cargo, no tomó a la vez el lugar dejado por Ruiz Danyau en el Ministerio, el que fue ocupado por el general de Brigada Aérea, Humberto Magliochetti, en el contexto de la última reorganización del gabinete hecha por Salvador Allende.

La oposición aprovechó el incidente apoyando a Ruiz e intentando demostrar que los ministros militares no tenían facultades reales para desempeñarse en sus cargos, con lo cual una vez más pretendía evidenciar que tales ministros, así como las propias FFAA, estaban siendo utilizados políticamente por la UP.

El movimiento gremial en curso alcanzó nuevos bríos a partir de los últimos diez días de agosto. El 19 el presidente de la CUT Provincial Santiago, de militancia demócrata cristiana, hizo un llamado a los gremios opositores para que se unieran en un paro general. Fundamentó la iniciativa en dos cuestiones, a saber, en la represión gubernamental sobre los gremios y en «los intentos de penetración marxista a las FFAA».¹³¹

El PN rápidamente emitió una declaración llamando a sus militantes a adherir al paro.¹³² La DC hizo lo propio. De tal manera se propendía a conectar en un sólo movimiento a la resistencia que la DC trataba de levantar a través de sujetos populares, con el gremialismo de las clases medias,

la pequeña burguesía y el gran empresariado, en los cuales el PN tenía gran presencia. Todo en torno a la huelga de los transportistas. En su concreción práctica, sin embargo, el paro esencialmente fue acatado por los sectores de comerciantes y pequeños empresarios, no logrando concitar la adhesión de los estratos laborales. Pese a ello, alcanzó importantes dimensiones. Los comandos multigremiales demostraron al respecto su efectividad.

El mismo día en que se realizaba el paro gremial, se efectuó frente a la residencia de Carlos Prats la manifestación de esposas de oficiales referida más arriba. Y al otro día, cuando el paro se había extendido hacia diversos lugares, el Congreso declaraba la ilegalidad del gobierno, con su correspondiente implícita llamada a los militares. De tal modo, factualmente se verificaba una plena sincronía entre el paro nacional de los gremios, las acciones en contra de los mandos militares constitucionalistas, y el acuerdo del Congreso Nacional en relación a la eventual ilegalidad del gobierno. Al mismo tiempo, las acciones terroristas experimentaron una nueva intensificación.

De hecho, pues, había en marcha un verdadero levantamiento, sustentado en un importante sector de las clases medias, los pequeños comerciantes y el empresariado, políticamente expresado por los partidos de oposición, los que así pretendían abrir paso a sus respectivas salidas políticas.

Luego de las jornadas del 21 y 22 de agosto, ya conseguido el alejamiento de Carlos Prats del mando del Ejército y de los generales Sepúlveda y Pickering, y conocidos los acuerdos del Congreso, se abrió otra fase de la lucha. Ella se caracterizó por el hecho de que el movimiento de la sociedad civil vinculado a la oposición asumió explícitamente las consecuencias derivadas de tales eventos. Esto es, levantó la exigencia de la renuncia de Salvador Allende. Así, el 30 de agosto las Federaciones de Estudiantes de la Universidad Católica de Santiago y de Valparaíso publicaron una destacada inserción de prensa titulada: «Hacia una nueva institucionalidad a través de la renuncia de Allende».¹³³ En medio de sucesivas huelgas de comerciantes, de profesionales, y de la acción de comandos multigremiales en provincias, -todos propendiendo a la paralización general del país-, el llamado de la FEUC, rápidamente se generalizó. Con notable uniformidad los movimientos gremiales pasaron a hacer suya la tesis sobre la renuncia del Presidente.

El 2 de septiembre se publicó en la prensa la inserción de un fantasmal Poder Femenino, que llamaba a las FFAA a restablecer el imperio de la ley».¹³⁴ El mismo día, en otra inserción, un "Movimiento Cívico Familiar "Sol", declaraba su adhesión a las peticiones de renuncia que se le hacían al Primer Mandatario.¹³⁵ A su vez, el Presidente de Confederación de la Producción y el Comercio, Jorge Fontaine, postulaba públicamente que Salva-

dor Allende debía renunciar al cargo de Presidente de la República, o en su defecto debía llamar a las FFAA para que desde el ministerio se hicieran cargo de la Administración Pública y del país.¹³⁶ Al mismo tiempo comenzó a desarrollarse un movimiento callejero en distintas ciudades, llevado a cabo principalmente por mujeres, consistente en recolectar firmas con el fin de exigir la renuncia del Primer Mandatario. Paralelamente el sacerdote Raúl Hasbún, desde las pantallas del canal 13 de Televisión, hacía un exhortación en torno a la misma idea, la que al día siguiente "El Mercurio" reprodujo en su integridad.¹³⁷

Dentro del mismo movimiento, el miércoles 5 de septiembre se llevó a cabo en el centro de Santiago una manifestación de mujeres pidiendo igualmente la renuncia del Presidente de la República. En esa oportunidad la consigna recurrente era: «Allende, proceda: imite a Balmaceda», (la cual ciertamente era extraordinariamente equívoca puesto que, como es sabido, Balmaceda nunca renunció, sino que se suicidó después de ser derrotado militarmente). De tal modo, durante la primera semana de septiembre, la campaña por la renuncia del Presidente de la República se había generalizado entre la oposición.

Paralelamente a ello el Consejo Nacional del PDC acordó el 4 de septiembre presentar una acusación constitucional en contra de todos los ministros que la colectividad considerase responsables de no poner término a las ilegalidades denunciadas por el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto. Los ministros acusados, según se señaló, serían entre seis y ocho. A la par la DC, en esta declaración, responsabilizó una vez más al gobierno por la falta de solución al paro del transporte, reiteró su apoyo a las FFAA en el cumplimiento de la ley de control de armas, al tiempo que insistió en acusar a la UP de pretender su infiltración.¹³⁸

Esta línea de acción, -polarizadora a todas luces-, sin dudas, se orientaba a generar una presión adicional dirigida a forzar el control institucional del gabinete por los militares.

El 6 de septiembre, a través de una declaración pública, el PN llamó a sus militantes y simpatizantes a plegarse a los paros de los distintos gremios y a incorporarse a un amplio movimiento de repudio nacional en contra del gobierno hasta lograr la renuncia de Salvador Allende.¹³⁹

También el 6 de septiembre, la directiva de las mujeres gremialistas, representando a más de diez provincias, hizo entrega de una carta a los senadores de la oposición, en la cual exigían la renuncia del Presidente de la República o bien que el Congreso declarara su inhabilidad. Si ello no ocurría en el plazo de una semana, señalaba la carta, las propias mujeres irían a golpear las puertas de los cuarteles, para pedir a las FFAA que actuaran.¹⁴⁰ Paralelamente, en las cercanías de muchas instalaciones militares, o

en sus mismas puertas, el piso empezó a aparecer tapizado de maíz, insinuándose así que los uniformados carecían de coraje para deponer al gobierno.

El levantamiento, pues, estaba lanzado, y el movimiento general había por fin explicitado su finalidad. Faltaba sólo el pronunciamiento de las FFAA. En todo caso estas, en una verdadera situación de pre-golpe, estaban ya actuando mediante allanamientos a empresas del Area Social. Sin ir más lejos, el 4 de septiembre la FACH había allanado las industrias MADECO y MADEMSA, sin encontrar armas.

Y como existía la posibilidad teórica de que el gobierno llamara a retiro a ciertos generales que estarían conspirando, el PN el viernes siete presentó un proyecto de reforma constitucional según el cual aquellos altos jefes de las FFAA que por ley debían ser nombrados con el acuerdo del Senado, no podrían ser removidos sin el consentimiento de éste.¹⁴¹

Así se entró en el último fin de semana del gobierno de Salvador Allende. Especialmente durante el día domingo, la prensa publicó las resoluciones de innumerables organismos gremiales controlados por la oposición llamando a la renuncia del Presidente y convocando a paro nacional indefinido. Entre ellas destacan las del Sindicato Nacional de Empleados de la Construcción;¹⁴² de los Colegios Profesionales de Osorno, Valdivia y Valparaíso;¹⁴³ el Consejo Nacional de Ingenieros y la Confederación de Colegios Profesionales de Chile;¹⁴⁴ las esposas de médicos del Regional Santiago del Colegio Médico;¹⁴⁵ la Confederación Nacional de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile (Valparaíso);¹⁴⁶ etc. No dejaba de ser notable la persistente uniformidad, en cuanto al contenido, que portaban todos estos pronunciamientos.

Ese mismo fin de semana el PDC tomó otra resolución fundamental, la que fue hecha pública el lunes diez. La mesa Directiva Nacional, junto a los presidentes provinciales de la colectividad, acordó pedir a todos sus senadores y diputados que renunciaran a su condición de tales. Ello debía dar paso a una actitud similar entre los parlamentarios de los restantes partidos, y, en fin, debía culminar con la renuncia del propio Presidente de la República. Luego debía procederse a convocar elecciones generales.¹⁴⁷

Así, pues, el desenlace parecía inminente. Cada partido opositor lo percibía con claridad y se lanzaba con todas sus reservas a producir la salida que deseaba.

En esta lucha de carácter global, la articulación entre los movimientos de la sociedad civil y la de los partidos se hacía patente. Había una coherencia que evidenciaba una planificación general en la que confluían distintos componentes. Todo se encaminaba al mismo fin. Se puede decir que lo que estaba en marcha era una insurrección típica, aunque sus participantes no necesariamente estaban unánimemente conscientes de ello.

5.4. La colaboración entre los militares golpistas y Patria y Libertad como parte de un plan insurreccional general

En consecuencia, lo que había en curso era una insurrección general que debía culminar con un golpe de Estado que pondría fin al orden institucional. La última semana de agosto de 1973 se había terminado de crear todas las premisas para culminar exitosamente la empresa, lo que se había traducido en la deliberada y exitosa destrucción del marco institucional de los conflictos por parte de la oposición rupturista, marco que el presidente Allende y el polo gradualista de la UP tan infructuosamente se empeñaron en mantener.

Dentro de ese proceso insurreccional cabe ahora destacar la colaboración de las Fuerzas Armadas -o de su sector golpista- con la oposición más extrema y violenta: Patria y Libertad.

En efecto, testimonios surgidos con posterioridad evidencian que las acciones terroristas llevadas a cabo por esa organización -acciones a las que hemos hecho mención más atrás-, no obedecían a una mera acción autónoma y espontánea. Por el contrario, formaban parte del plan general del golpe de Estado que largamente habían venido elaborando los militares no constitucionalistas. En particular, al parecer, se articularían con el plan que desde marzo de 1972 había venido estructurando desde el Estado Mayor del Ejército, el general Augusto Pinochet, plan al que el mismo general se refiere en su libro «El Día Decisivo».

Roberto Thieme, jefe operativo de Patria y Libertad, ha dejado un valioso testimonio sobre dicha articulación. Relata lo siguiente:

«Cuando se generó el plan para derrocar a la UP, las Fuerzas Armadas nos contactaron para que diéramos apoyo operacional para paralizar el país y crear las condiciones para el golpe.... Fuimos contactados por un sector de una de las ramas de las Fuerzas Armadas para contribuir al golpe, en término de cortar vías de transportes, energía y comunicaciones, y recibimos de las instituciones castrenses el apoyo logístico para esa misión. Estamos hablando de operaciones que se realizaron entre el 16 de julio y el 11 de septiembre de 1973.» Y continúa Thieme: «en el contexto de crear las condiciones del pronunciamiento, efectuamos sabotajes, cortamos puentes y líneas de ferrocarril, bajamos torres de alta tensión. Hubo varias acciones armadas, pero -concluye- preferiría no entrar en detalles.»¹⁴⁸

La colaboración entre el sector golpista de las FFAA y Patria y Libertad, emerge, entonces, como una de las facetas destacables de la estrategia final orientada a producir un golpe de Estado en Chile.

5.5 El Golpe como plan Integral: breve recapitulación

A modo de recapitulación, podemos sostener, en fin, que el plan general que debía culminar en el golpe de Estado, aparte de las cuestiones técnicas inherentes a la acción militar misma, suponía un marco que al menos contemplaba:

1) La remoción de los mandos constitucionalistas de las FFAA de modo tal que los grupos golpistas asumieran el control de las mismas, cuestión finalmente conseguida en los términos relatados más atrás;

2) Una base jurídica legitimadora del golpe, cuestión que se pretendía obtener con el pronunciamiento del 22 de agosto del Congreso;

3) Un movimiento de la sociedad civil orientado a generar la ingobernabilidad y a pedir la renuncia del Presidente de la República, cuestión plasmada en el paro general indefinido de la pequeña burguesía, el gran empresariado y un sector de las clases medias, cuya punta de lanza era el movimiento de los transportistas; cuestión unida a una campaña de exacerbación psicológica destinada a maximizar los miedos e incertidumbres de la población (y del personal militar mismo) en vistas a generar un intenso deseo de abrir paso a un desenlace rápido y radical;

4) Una negativa de los partidos de oposición a negociar soluciones políticas con el gobierno a fin de salvaguardar el orden constitucional; y

5) Terrorismo desatado, orientado a maximizar el caos y el descontrol, terrorismo que el plan de los militares asignó a Patria y Libertad, según el ya citado testimonio del jefe operativo de esta organización, Roberto Thieme.

Por otro lado, la acción opositora en general, así como también los planes específicos encaminados a desembocar en un golpe de Estado, contaron con el permanente monitoreo y activo apoyo financiero y político del gobierno de los EEUU, a través de sus organismos de inteligencia, según lo describe el informe del Senado de ese país, «Acciones Encubiertas en Chile».

6. La crisis final de la UP y las grandes manifestaciones populares previas al golpe

En la medida que la situación se hacía más crítica, dentro de la UP se fue produciendo un agravamiento de sus diferencias, las que finalmente se tradujeron en una total parálisis del conglomerado ante la imposibilidad de llegar a acuerdo sobre la actitud a adoptar frente al verdadero levantamiento opositor en curso. Poco antes del desenlace se puso una vez más en evidencia la incompatibilidad de los proyectos representados por el polo revolucionario y el polo gradualista, los que se obstaculizaban mutuamente.

Ello dificultaba en alto grado la capacidad de maniobra de Salvador Allende. Como se señaló más atrás, durante la segunda mitad de agosto las orientaciones principales del Presidente consistían en: 1) quebrar el paro

de los transportistas aplicándole la Ley de Seguridad Interior del Estado y designando interventores militares; 2) buscar al mismo tiempo una salida política mediante algún acuerdo con la oposición demócrata cristiana;¹⁴⁹ 3) Conjurar el desborde militar y consolidar el mando constitucionalista en las FFAA¹⁵⁰; 4) En caso de que se produjera un levantamiento armado, poner en práctica ciertos planes anti insurreccionales en conjunción con el mando constitucionalista; y 5) Respetar irrestrictamente la legalidad para no dar pie a que la oposición usara tal pretexto para embarcar a las FFAA en un golpe.

En la UP y en la izquierda en general no había consenso en torno a tal curso político. El punto clave de las discrepancias se situaba en torno a la cuestión de la búsqueda de un eventual acuerdo con la DC. Los dos partidos ejes del conglomerado de gobierno se dividieron frontalmente en lo relacionado con este punto.

La línea del PC, obviamente, era favorable a un acuerdo con los demócrata cristianos. A fines de agosto la colectividad realizó un pleno de su Comité Central. El informe fue leído por Jorge Insunza. En él se postuló la necesidad de un viraje político en la UP, el cual debía consistir en pasar hacia «una política (orientada) a la conquista sólida de la mayoría y al cambio de la correlación de fuerza en favor del proceso revolucionario...»¹⁵¹ Según la percepción del PC, en Chile había mayoría en contra del golpe de Estado y la guerra civil; también la había para apoyar el proceso de transformaciones y a un desarrollo democrático del país. El problema, a juicio de este partido, radicaba en que aquella no se expresaba y estaba dispersa. Por tanto, era necesario lograr que se manifestara y uniera “en torno a la clase obrera”.

La dificultad principal que obstaculizaba dicho propósito, a juicio del PC, seguían siendo las «deformaciones en la línea de la Unidad Popular», las que se deberían a «la presencia de tendencias extremistas del revolucionarismo pequeñoburgués, (y) el ultraizquierdismo, factor que -según el informe- ha(bía) ayudado objetivamente a los reaccionarios».¹⁵² A partir de tal diagnóstico la colectividad planteó la urgente necesidad de un diálogo con la DC, tanto en la base social como en el nivel de las cúpulas. El PC, de este modo, prescindió de las antiguas diferenciaciones que solía hacer entre el sector freista de la DC y el resto del partido.

El PR coincidió en lo esencial con tales planteamientos. En un documento publicado a comienzos de septiembre, luego de valorar la gestión del Presidente Allende, sostuvo que, no obstante, existían errores que habían «colocado innecesariamente a sectores importantes de la población en contra del gobierno de la Unidad Popular». ¹⁵³ Entre tales errores subrayó “el sectarismo político, la indisciplina laboral, (y) la ineficiencia funciona-

ia...". Para el futuro, la cuestión más importante, según el documento Radical, consistía en "consolidar para avanzar", cuestión que, a su juicio, era plenamente coherente con la búsqueda de un acuerdo político con la oposición.

La búsqueda de un consenso mínimo con la oposición moderada postulada por el Polo gradualista y por Salvador Allende coincidía con la actitud de ciertos sectores progresistas de la DC. El 30 de agosto el diario «El Siglo» publicó un artículo de Radomiro Tomic titulado «A qué obligan las rectificaciones». Allí se postuló que quedaba muy poco tiempo para que se pudiese concretar un acuerdo entre el gobierno y la DC y que para hacerlo posible había que concordar entre ambas partes ciertas rectificaciones. La primera consistía en que el Presidente de la República debía reconocer «que en una democracia como la chilena, no puede la minoría imponer sus puntos de vista a la mayoría, mediante resquicios legales, hechos consumados, ilegalidades más o menos encubiertas o medidas meramente administrativas. Que para gobernar en asuntos de importancia el gobierno necesita transformarse en mayoría institucional...», lo cual implicaba llegar a acuerdos con la DC. Pero de otra parte, -agregaba Tomic- «para que dicha exigencia tenga fundamento ético y sentido político es indispensable que el Congreso, a su vez, reconozca la obligación de no negar al Gobierno los medios para gobernar. Y de no exigirle que contradiga lo esencial del programa con que fue elegido por el pueblo chileno».¹⁵⁴

En una posición similar a la de Tomic, Renán Fuentealba manifestó su preocupación por el curso que llevaban los acontecimientos. Además de ser partidario de un acuerdo político que evitara el derrumbe institucional, había declarado con alarma que en Chile estaban actuando distintos organismos extranjeros que querían precipitar un golpe contra Salvador Allende.¹⁵⁵ Es decir, en la DC existía un sector sensible a los planteamientos del Primer Mandatario y del Polo gradualista, sector que desde sus propias especificidades, propiciaba una salida política que no implicara poner fin al gobierno de la UP.

El polo revolucionario, por su parte, no concordaba con la necesidad de llegar a acuerdo con algún sector opositor. El 8 de septiembre terminó un pleno del Comité Central del PS donde se ratificaron las posiciones que al respecto el partido venía sosteniendo al interior de la UP. Las resoluciones fueron dadas a conocer por Carlos Altamirano el domingo 9 en un acto masivo en el Estadio Chile. La principal cuestión abordada residía en cómo enfrentar el golpe que se avecinaba. En tal sentido, el PS reiteró su persistente negativa a una solución dialogada con la DC, enfatizando su tesis sobre la necesidad de sostener el gobierno en «el apoyo de las masas». «El golpe reaccionario -sostuvo Altamirano en su discurso- se aplasta con

la fuerza de los trabajadores, con las organizaciones de nuestros obreros, con los comandos comunales, con los cordones industriales». Y agregó: «el Partido Socialista ha dicho que no puede haber diálogo con quienes están llevando el caos económico a la patria...».¹⁵⁶ “Reconocemos -continuó Altamirano- que existen sectores democráticos en la DC, pero no son mayoría. El Partido Socialista -dijo- piensa que la derecha puede ser aplastada sólo con la fuerza incontenible del pueblo unido, oficiales y suboficiales leales”. Chile - afirmó- se transformará “en un Viet-Nam heroico, si la reacción pretende enseñorearse en (el) país”.¹⁵⁷ En ese contexto el secretario general del PS reconoció que había tenido reuniones con grupos de marineros, procediendo a señalar luego su alcance y a fundamentar su legitimidad.

En resumen, la posición del PS consistía en que, renunciando a todo acuerdo con la DC, el golpe en marcha debía ser encarado por la izquierda preparándose para obtener el triunfo en un enfrentamiento decisivo, apoyándose «en las masas» y en un sector de las FFAA.

El MIR, fuera de la UP, y el MAPU de Garretón, dentro de esta, se encontraban en una posición muy cercana a la del PS. Incluso el MAPU de Garretón, como se señaló en el capítulo anterior, había adoptado la consigna «A ganar la Guerra Civil», pintándola a lo largo y ancho del país.

Dentro de este cuadro de diferencias, Salvador Allende concluyó en que la única opción que quedaba para evitar el golpe consistía en convocar a un plebiscito en concordancia con el PDC. Consideraba que al procederse así el eje del conflicto nacional se recolocaría en el plano institucional, excluyéndose de tal modo las soluciones militares que impulsaba la oposición rupturista.

Entre fines de agosto y comienzos de septiembre el Presidente hizo su propuesta con carácter de urgente al Comité Político de la UP. Allí postuló que la iniciativa que lanzaba debía adelantarse al golpe. Por lo tanto, tenía que ser adoptada con rapidez. Durante la primera semana de septiembre el Comité Político de la UP estuvo discutiéndola a diario. En torno a la iniciativa de Salvador Allende, entonces, se verificó el último debate de la UP antes de ser derrocada.

Según la idea de Salvador Allende, el diálogo debía ser propuesto de un modo tal que pudiera ser aceptado por Eduardo Frei, a quien estimaba como la personalidad más influyente de la oposición. Según relata Orlando Millas en sus memorias, el Presidente pensaba que el plebiscito debería plantearse en términos «que podrían ser hechos suyos por una serie de personalidades del mundo universitario muy cercanas a Frei y que seguramente lo consultarían antes de asumir cualquier compromiso».¹⁵⁸ Las gestiones para abrir el diálogo serían hechas precisamente a través de tales personalidades.¹⁵⁹

La propuesta de Salvador Allende, sin embargo, no concitó consenso al interior del Comité Político de la UP. El PC, el PR, el MAPU-OC, y el API estuvieron de acuerdo con ella. El PS, el MAPU y la IC se manifestaron en contra.¹⁶⁰

El 8 de septiembre se reunieron nuevamente los representantes de los partidos de la UP. Pero la impasse se reprodujo una vez más. El PS estaba en la posición más dura, representado por Adonis Sepúlveda y Erick Schnake. Este último argumentó que según sus datos, la situación no era tan desfavorable en el Ejército, pero que aún «en caso de golpe vendría sin duda un contragolpe para afirmar al gobierno y avanzar más resueltamente en la aplicación de su programa».¹⁶¹

La reunión se levantó sin acuerdo. Ninguna resolución pudo ser tomada por cuanto el reglamento que regía el funcionamiento del conglomerado de gobierno estipulaba que los acuerdos debían ser adoptados por unanimidad. En virtud de ello fue que formalmente las propuestas de Salvador Allende debían ser consideradas como no aceptadas. Así, la crisis de la UP se hizo total, acentuando su parálisis, que ya venía desde tiempo atrás.¹⁶²

Al día siguiente, domingo 9 de septiembre, miembros de la Comisión Política del PC se reunieron con el Primer Mandatario. Allí, según las memorias de Orlando Millas, participante en la reunión, a través de Luis Corvalán, esta colectividad «argumentó apasionadamente (para que) el Presidente no demorase el llamado a plebiscito, aunque el Partido Socialista discrepase».¹⁶³ En el curso de esta misma reunión Allende recibió la noticia telefónica sobre las afirmaciones que Carlos Altamirano estaba haciendo en su discurso del Estadio Chile, en particular en lo referente a los contactos que había tenido con miembros de la marinería.¹⁶⁴ Abrumado, el mandatario, según Orlando Millas, concluyó en que “eran demasiadas las fuerzas que desde distintos ángulos optaban por una solución violenta”. No obstante, según el PC “la solución plebiscitaria, civil, política también tenía detrás grandes fuerzas, la mayoría de los partidos de la Unidad Popular, los sectores democráticos de los otros partidos políticos, el sector constitucionalista de las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, una parte de la masonería...”, por lo que “se requería anunciar de inmediato esta solución hablando por televisión y radio, lo cual podría inclinar en este sentido a la directiva demócrata cristiana...”¹⁶⁵

Para Salvador Allende era complejo tomar una resolución que explícitamente contradecía la línea de su propio partido. Sin embargo, ante la gravedad de las circunstancias finalmente se decidió a hacerlo. De tal modo, el discurso en donde el Presidente anunciaría una salida política a través de una fórmula plebiscitaria quedó fijado para el martes 11 de septiembre.

De esta manera, la resolución de Salvador Allende supuso un reconocimiento implícito del quiebre de la UP, precisamente por cuanto la opción que el Presidente había ideado debía operar por sobre la ausencia de un acuerdo formal del Comité Político de aquella. Y esa falta de acuerdo sobre una cuestión tan urgente y decisiva evidenciaba que el bloque de partidos de gobierno, al menos como frente con capacidad de dirección política, prácticamente había dejado de existir.

Pese a su falta de coherencia interna, el conglomerado de gobierno no había dejado de convocar e interpelar a un extenso sujeto popular, aunque frecuentemente mediante la acción de cada uno de sus partidos por separado. Así, ante la ofensiva opositora, la UP logró oponer una «movilización de masas» muy considerable. A través de la CUT se habían hecho importantes manifestaciones en solidaridad con el general Prats con posterioridad a la renuncia de este; luego, se verificaron marchas de mujeres por el centro de Santiago intentando contrarrestar al movimiento que pedía la renuncia de Salvador Allende. En general, se intentaba responder a cada expresión de descontento opositor, con manifestaciones de apoyo al gobierno.

Otro ámbito importante de la movilización de la base social de la UP continuó llevándose a cabo en torno a las industrias. Allí frecuentemente se formaban entre los trabajadores brigadas de defensa de las empresas, -muchas de ellas tomadas, aunque produciendo- en contra de eventuales acciones terroristas, etc.

Luego vinieron, a lo largo de todo el país, las grandes manifestaciones con motivo del tercer aniversario del triunfo de la UP. El 4 septiembre 700.000 personas en Santiago inundaron el centro de la ciudad y por última vez pasaron frente a La Moneda ante un escenario presidido por Salvador Allende. Desfiles análogos en otras provincias evidenciaron un importante nivel de apoyo al gobierno. Pero ya todo era impotente ante la falta de una orientación política definida y unívoca.

Aún más, la incoherencia interna de la UP y la dualidad entre polo gradualista y polo revolucionario, se manifestaba también en el carácter de las propias movilizaciones que uno y otro impulsaba. El polo revolucionario, en particular el MIR, frecuentemente llevaba a cabo tomas de caminos y otras acciones similares que contribuían a generar el caos, contradiciendo la pretensión del polo gradualista de normalizar la situación a fin de contribuir por esa vía a estabilizar al gobierno. En otras partes el polo revolucionario prometía armas para defender el gobierno si estallaba el golpe y organizaba a los obreros en una perspectiva más militar, etc.

Más allá de tales avatares, a estas alturas del proceso político, los sectores obreros, principal sustento social del gobierno, se encontraban ais-

lados respecto de la pequeña burguesía y de la mayoría de los sectores medios, los que, como hemos visto, activamente se movilizaban por la caída de Salvador Allende, en alianza con los grandes poderes fácticos. Estos hechos eran decisivos puesto que marcaban el fracaso de la política de la UP, la que, a lo menos en la versión del polo gradualista había aspirado a concitar la unidad de una mayoría nacional por los cambios hacia el socialismo.

La incapacidad que finalmente evidenció la UP para conformar tal mayoría, también tuvo que haber influido en el alineamiento del las FFAA en contra del gobierno, precisamente porque su oficialidad provenía principalmente de familias de clase media y de pequeños y medianos empresarios, los que en el curso del proceso político, como se ha visto, llegaron a desarrollar conductas reflejas basadas en fuertes temores, en buena medida incentivados sistemáticamente por la oposición rupturista a lo largo de tres años. Ello en algún grado permite explicar la violencia extrema que advendrá luego del derrocamiento de la UP.

7. El Golpe

En la planificación que había hecho el General Pinochet, el golpe de Estado estaba fijado inicialmente para el viernes catorce de septiembre. Ese día se realizaría la parada militar preparatoria y, por tanto, podría pasar desapercibida la repartición de equipo de guerra y municiones a las diferentes unidades, así como también su movilización. Sin embargo, la fecha debió ser adelantada para el martes once.

Existen dos versiones principales sobre el adelanto de la fecha. Una pertenece al propio general Pinochet. Según este, el anticipo obedeció a una solicitud del Jefe de la I Zona Naval, Almirante José Toribio Merino. Se le habría respondido favorablemente en vistas de que «en Valparaíso la Armada estaba apenas contenida, y que, de no aceptarse lo que se solicitaba, ella actuaría sola el once de septiembre...» echando «por tierra la planificación que tan cuidadosamente había elaborado el Ejército»¹⁶⁶

La segunda versión ha sido propuesta por Joan Garcés. Según ella, el adelanto de la fecha del golpe se debió al conocimiento que el día 9 de septiembre tuvo el General Pinochet sobre la decisión de Salvador Allende en orden a convocar a un plebiscito, cuestión que, como hemos visto, habría obstaculizado seriamente a la solución militar ya en marcha. Enterados de que el martes 11 de septiembre el mandatario comunicaría al país su decisión, la jefatura del levantamiento habría decidido anticiparse y dar el golpe ese día.¹⁶⁷

La intervención militar requirió, en todo caso, durante su mismo proceso de estallido, deponer al mando de la Armada, a cuya cabeza figura-

ba el Almirante Montero, quien de facto fue desplazado por el Almirante José Toribio Merino. En Carabineros ocurrió una situación análoga, donde el general Sepúlveda fue depuesto por el General Cesar Mendoza.

Desde su mismo comienzo el golpe se desató con extrema violencia. El Presidente Allende se encerró en el Palacio de La Moneda con algunos de sus partidarios. Ordenó que las mujeres salieran del recinto. Luego aceptó el retiro de la guardia de Carabineros, aunque puso como condición que lo hicieran sin sus armas. Entonces, cuarenta civiles se dispusieron a enfrentar el asedio del Ejército y el bombardeo de la Fuerza Aérea.¹⁶⁸ A las pocas horas el Presidente yacía muerto y La Moneda en llamas por los efectos de los rockets de los Hawker Hunters. Así, la solución política que había intentado el mandatario y el Polo gradualista resultó abruptamente abortada. El polo revolucionario, por su parte, evidenció que no tenía ninguna capacidad real de acción frente a unas FFAA disciplinadas y cohesionadas, de las cuales no había logrado extraer ni una sola unidad.

De tal manera culminó el proceso de levantamiento general que largamente venía operándose en contra del gobierno.

El jueves 13 de septiembre se publicó por la prensa una declaración del PDC en la cual este partido llamó a una cooperación patriótica de todos los sectores con el nuevo gobierno. En ella, además, sostuvo que los hechos vividos habían sido el producto del «desastre económico, caos institucional, violencia armada y la crisis moral» a la que el gobierno depuesto habría conducido a Chile. Las FFAA y Carabineros, -añadió-, «no buscaron el poder», por lo cual lo devolverían «al pueblo soberano para que libre y democráticamente decida sobre el destino patrio». La DC dijo lamentar lo ocurrido. Agregó que había agotado «sus esfuerzos por alcanzar una solución política institucional» y que continuaría empeñándose en el logro del «desarme de los espíritus y de las manos».¹⁶⁹

Un grupo de parlamentarios y personeros del ala progresista del PDC, sin embargo, emitió su propia declaración en un ánimo completamente distinto. En ella se manifestaron contrarios al golpe militar, reconociendo que el Presidente Allende, a cuya figura rindieron tributo, se había esforzado sinceramente por buscar una salida política que evitase el derrumbe institucional.¹⁷⁰

El Partido Nacional, por su parte, se declaró plenamente solidario con la intervención de las FFAA y, más aún, luego tomó la resolución de autodisolverse considerando que en las manos de los uniformados debía quedar la tarea de refundar el país.

Mientras tanto, los partidos de la UP fueron objeto de una intensa represión y sus dirigentes y militantes más destacados encarcelados, pasando a la clandestinidad aquellas estructuras que estuvieron en condiciones

de hacerlo.

En cuanto a la reacción de los demás poderes del Estado, el Presidente de la Corte Suprema, expresó «su más íntima complacencia en nombre de la Administración de Justicia de Chile», con el propósito del nuevo Gobierno «de hacer cumplir las decisiones del Poder judicial sin examen previo de su legalidad». ¹⁷¹ Al día siguiente el Pleno del alto Tribunal ratificó las declaraciones de su presidente.

El Parlamento, sin embargo, no alcanzó a expresar opinión alguna puesto que por el Bando 29 del 13 de septiembre, la Junta de Gobierno lo declaró disuelto.

* * *

De tal modo, el conflicto político hasta entonces existente se resolvió definitivamente y el proyecto de la UP quedó cancelado. En todo caso, lo que quedaba por verse todavía era cuál de los proyectos opositores se impondría a través de los militares. ¿Sería el consistente en refundar el país, reestructurando el Estado, la sociedad y la economía mediante la intervención orgánica de las FFAA?, ¿o aquél que buscaba producir un mero cambio de gobierno con apoyo de los uniformados mediante una formalidad lo más cercana posible a las disposiciones legales con el fin de llamar luego ● nuevas elecciones?

Esta cuestión estaba relacionada estrechamente con otra, a saber, cuál de las dos alas de la oposición había usufructuado en su beneficio de la unidad táctica que entre ambas se había producido. Dicho de otra manera, ¿cuál de los dos proyectos opositores había usufructuado de los esfuerzos de su aliado? Eso era lo que había que visualizar ahora.

En el intertanto «la niebla se extendió en el campamento y la bestia, que dormita en lo íntimo del ser humano civilizado, despertó súbitamente con frenética avidez de víctimas...». ¹⁷²

Notas

¹ Véase Carlos Prats, «Memorias», Ed. Pehuen, Santiago, 1987, p.423

² Tales temáticas, por cierto, adicionalmente sirvieron a los propósitos de crear un ambiente propicio a los fines de legitimar la extrema violencia que advendría luego del golpe. La cuestión, sin dudas, no era secundaria desde la óptica de un proyecto de refundación total del país, como el que la derecha se proponía. En efecto, una refundación tal, en las condiciones existentes, caracterizadas por poderosos sujetos contrarios a ella, era difícilmente realizable sin elevadas cuotas de violencia.

³ Citado por Joan Garcés en «Allende y la Experiencia Chilena», Ed. Ariel, Barcelona, 1976, p.306.

⁴ Véase «El Mercurio», 30 de junio de 1973, páginas 1 y 8.

⁵ «El Mercurio», 30 de junio de 1973, p.8.

⁶ «El Mercurio», 30 de junio de 1973, p.19.

⁷ Véase «El Mercurio», 30 de junio de 1973, p.19.

⁸ «La Prensa», 1 de julio de 1973, p.1.

⁹ Carlos Prats refiere en sus Memorias una conversación con el líder del MIR, Miguel Enriquez, a pedido de este, quien le habría procedido a entregar cierta información confidencial. Enriquez manifestó a Prats que los generales Bonilla, Bravo y Arellano eran los más vinculados a la DC y que el primero había recomendado a este partido no aprobar la petición de estado de Sitio del Gobierno, a raíz del motín del blindado....; que Bonilla habría expresado a Frei que «si ocurría algo», este, en su calidad de Presidente del Senado, pasaría a ser el jefe del estado». Carlos Prats. «Memorias», Ed. Cit, p.433.

¹⁰ El General Carlos Prats en sus Memorias al respecto relata lo siguiente: «El Auditor General de Guerra, General Osvaldo Salas, me da su increíble opinión personal, en cuanto a la inconveniencia de que la Justicia Militar abra un proceso a «Patria y Libertad», movimiento que reconoció públicamente haber promovido el motín del Batallón Blindado 2, con lo que se confesaba culpable del delito de sedición. «Memorias», Ed. citada, p.426.

¹¹ «El Siglo», 2 de julio de 1973.

¹² Carlos Prats, «Memorias», Ed. cit, página 424.

¹³ A este planteamiento, Carlos Prats respondió que las FFAA se encargarían de los grupos paramilitares, pero que sería «fatal esperar de (ellas) una intromisión política en el gobierno». El relato de Prats sobre la reunión concluye señalando lo siguiente: «me retiro con la sensación de no haber logrado una apertura decidida de quien tiene tanto ascendiente en el partido político clave del momento». Carlos Prats, «Memorias», Ed.Citada, p.432.

¹⁴ Véase Carlos Prats, «Memorias», Ed. citada, p.424 y siguientes.

¹⁵ «El Siglo», 25 de junio de 1973, p.3.

¹⁶ «El Mercurio», 24 de julio de 1973, p.21.

¹⁷ «El Mercurio», 14 de julio de 1973, p.29.

¹⁸ Declaraciones de Miguel Enriquez. «El Mercurio», 14 de julio de 1976, p.29.

¹⁹ Véase las declaraciones del subsecretario del Interior, Daniel Vergara, sobre la materia. «El Mercurio», 14 de julio de 1973.

²⁰ Al respecto, véase el Capítulo VII, especialmente los planteamientos de Salvador Allende hechos en su discurso del Primero de Mayo de 1973.

²¹ Arturo Valenzuela, «El Quiebre de la Democracia en Chile», FLACSO, 1989, p. 253.

²² Véase el discurso pronunciado por Luis Corvalán el 8 de julio de 1973 en «Tres Periodos de Nuestra Línea Revolucionaria», Dresden, 1982, p.145 y siguientes.

²³ Véase la intervención de Carlos Altamirano ante la Asamblea de dirigentes de Cordones Industriales publicada en «El Siglo», el 13 de julio de 1973, p. 6 y 7.

²⁴ Al respecto, véase el discurso de Salvador Allende en el Mineral de El Salvador, «El Siglo», 12 de julio de 1973. Véase también el discurso del Presidente en el Plenario de Federaciones de la CUT el 23 de julio, en donde sostuvo que sería reprimido «cualquier intento sedicioso» y que no habría fuerzas armadas paralelas. «La Nación», 26 de julio de 1973. p.23, 24 y 25.

²⁵ «El Siglo», 13 de julio de 1973, p.6 y 7.

²⁶ «El Mercurio», 14 de julio de 1973, p.29.

²⁷ Esta práctica era también habitual entre la oposición rupturista, especialmente entre los grupos de Patria y Libertad y del Comando Rolando Matus, de la Juventud Nacional.

²⁸ Carlos Prats, en esa oportunidad, según lo refiere en sus memorias, se limitó a plantear que las inquietudes de los mandos serían expuestas al gobierno, pero en forma reservada, según el procedimiento habitual. Al mismo tiempo, les hizo ver a los presentes en la reunión su extrañeza ante el hecho de que, en contraste con la opiniones vertidas, «ningún general ni almirante ha expresado su alarma por el robo de las ametralladoras pesadas del Ejército ni por la lucha armada anunciada por «Patria y Libertad». Carlos Prats, «Memorias», Ed. citada, p.440 y 441.

²⁹ «El Mercurio», 7 de julio de 1973, p.1.

³⁰ Luego del golpe de Estado del 11 de septiembre, la Junta de Gobierno esgrimió estos mismos argumentos aportados por la oposición para justificar el derrocamiento de Salvador Allende. Véase al respecto el «Libro Blanco del cambio de Gobierno en Chile», Ed. Lord Cochrane S.A., Santiago, s/f.

³¹ «El Mercurio», 6 de julio de 1973, p.24.

³² Véase la página 320 del presente capítulo.

³³ Véase «El Mercurio», 7 de julio de 1973, p.27.

³⁴ «El Mercurio», 7 de julio de 1973, p.27.

³⁵ «La Nación», 7 de julio de 1973.

³⁶ «El Mercurio», 7 de julio de 1973, p.29.

³⁷ «El Mercurio», 7 de julio de 1973, p.29.

³⁸ «El Mercurio», 12 de julio de 1973, p.23.

³⁹ «El Siglo», 17 de julio de 1973.

- ⁴⁰ «La Prensa», 18 de julio de 1973, p.18.
- ⁴¹ «El Mercurio», 7 de julio de 1973.
- ⁴² «El Mercurio», 8 de julio de 1973.
- ⁴³ «El Siglo», 16 de julio de 1973.
- ⁴⁴ «El Siglo», 17 de julio de 1973.
- ⁴⁵ «El Mercurio», 17 de julio de 1973.
- ⁴⁶ Véase «El Mercurio», 17 de julio de 1973, p.1 y 10.
- ⁴⁷ Luis Corvalán, el 27 de julio, en una intervención en el Pleno del C.C. del PC, resumió la posición de su partido en los siguientes términos: «aquí hay que partir de la necesidad de evitar la guerra civil, que es un peligro real, y de asegurar que los cambios revolucionarios prosigan, como dice el Episcopado, buscando una forma chilena, original, creadora, que nos transforme en una sociedad moderna y progresista....Se trata -agregó más adelante- de un diálogo en que se parte del respeto a las posiciones de cada cual, en busca de las posibles coincidencias o convergencias, y estamos convencidos de que en las condiciones de hoy existe la posibilidad de alcanzar éxito en este terreno». Luis Corvalán Lepe, «Estamos por el diálogo que propone el Presidente», intervención en el pleno del C.C. del P.C., en «Tres Periodos de nuestra vía revolucionaria», Berlín, 1982, p. 141 y siguientes.
- ⁴⁸ «El Mercurio», 26 de julio de 1973.
- ⁴⁹ Véase «El Mercurio», 29 de julio de 1973, p.5.
- ⁵⁰ «La Nación», 6 de agosto de 1973, p.8.
- ⁵¹ «Si este proyecto de capitulación cristaliza, sus consecuencias serán gravísimas -pensaba el MIR-: se dividirá la izquierda, se generará la división de la clase obrera y el pueblo, y la ofensiva reaccionaria no sólo no será paralizada, sino que, cumplido su objetivo táctico de debilitar y dividir el campo de los trabajadores, cobrará nuevos bríos y caerá sobre los trabajadores y el mismo gobierno con toda la fuerza y energía reaccionaria golpista». Miguel Enriquez, entrevista en «Chile Hoy», citada por Carlos Prats, Op. Cit., p.494.
- ⁵² «La Prensa», 20 de julio de 1973, p.7.
- ⁵³ Véase «El Siglo», 27 de julio de 1973.
- ⁵⁴ «El Mercurio», 27 de julio de 1973, p.27.
- ⁵⁵ «El Mercurio», 27 de julio de 1973, p.23.
- ⁵⁶ «El Mercurio», 29 de julio de 1973, p.5.
- ⁵⁷ «El Mercurio», 29 de julio de 1973, p.5.
- ⁵⁸ «El Mercurio», 30 de julio de 1973.
- ⁵⁹ Véase «Acciones Encubiertas en Chile, 1963-1973». Senado de los Estados Unidos, en «Frei, Allende y la Mano de la CIA», compilado y traducido por Cristian Opaso, Ed. Ornitorrinco, Santiago, sin fecha, p. 83.
- ⁶⁰ «El Mercurio», 26 de julio de 1973.
- ⁶¹ «El Mercurio», 27 de julio de 1973.

- ⁶² «El Mercurio», 27 de julio de 1973.
- «El Siglo», 27 de julio de 1973.
- ⁶⁴ «El Mercurio», 28 de julio de 1973.
- ⁶⁵ «El Siglo», 29 de julio de 1973.
- ⁶⁶ «El Siglo», 30 de julio de 1973.
- ⁶⁷ «El Mercurio», 31 de julio de 1973.
- ⁶⁸ «El Mercurio», 28 de julio de 1973.
- ⁶⁹ Véase la carta de Patricio Aylwin a Salvador Allende, «El Mercurio», 3 de agosto de 1973, p.8
- ⁷⁰ Véase la citada carta de Patricio Aylwin a Salvador Allende.
- ⁷¹ Al respecto, véase la carta respuesta de Salvador Allende a Patricio Aylwin, «El Mercurio», 3 de agosto de 1973, p.8.
- ⁷² Carta respuesta de Salvador Allende a Patricio Aylwin. «El Mercurio», 3 de agosto de 1973, p.8
- ⁷³ Salvador Allende, carta citada.
- ⁷⁴ «El Mercurio», 8 de agosto de 1973.
- ⁷⁵ El ánimo de los mandos militares, inclinados ya contra el gobierno, queda reflejado en el siguiente episodio, relatado por Carlos Prats, en relación a la actitud de la cúpula del Ejército sobre el cambio de gabinete. «Los generales se muestran desconcertados, -señala el relato-. Algunos dicen haber esperado que el acceso de las FFAA al gobierno sería como lo planteaba la DC: con una representatividad de generales y almirantes que cubriera la mitad o dos tercios del gabinete, y el resto con personalidades apolíticas, y debiendo, además, cubrirse los mandos medios. Les explico -continúa Prats- que esa salida significaría dar un «golpe seco», que dejaría en interdicción al Presidente. Les insisto en que se trata de un esfuerzo supremo por posibilitar el diálogo y que debe de comprenderse que el caso de Chile es distinto al de Uruguay, por lo que no se puede intentar copiar el esquema de ese país». Carlos Prats, «Memorias», Ed. citada, p.457. (Como se recordará, en Uruguay el presidente Bordaberry, apoyado en los militares, dio un golpe de Estado, cerró el Congreso y siguió gobernando con el respaldo de los uniformados).
- ⁷⁶ Según señala Carlos Prats en sus Memorias, los generales de la Fuerza Aérea estimaban «que el ingreso de las FFAA al gobierno implica(ba) asumir de seis a nueve ministerios, con cambio, además, de los mandos medios». Carlos Prats, Op. Cit., p.458.
- ⁷⁷ Sergio Bitar sostiene que «aislado, Allende constituyó un nuevo gabinete con presencia militar para satisfacer la exigencia demócratacristiana (planteada en el reciente fallido diálogo). Pero -añade- otra vez ese partido se desentendió de su compromiso. Asistiendo al diálogo, la directiva de la DC, en un acto de trágica astucia, pretendió salvar su responsabilidad de los hechos que se avecinaban». Op. Cit., p.243-244
- ⁷⁸ Joan Garcés, Op. Cit., p.314.
- ⁷⁹ «El Siglo», 12 de agosto de 1973, p.3.
- ⁸⁰ «El Siglo», 11 de agosto de 1973, p.6.

- ⁸¹ «El Mercurio», 10 de agosto de 1973.
- ⁸² «El Mercurio», 15 de agosto de 1973.
- ⁸³ «El Mercurio», 9 de agosto de 1973, p.8.
- ⁸⁴ «El Mercurio», 11 de agosto de 1973, p.1.
- ⁸⁵ En conversación con Carlos Prats a propósito del paro del transporte, Patricio Aylwin, el 13 de agosto, le señaló al Comandante en Jefe del Ejército que «el PDC no esta(ba) en la tónica de derrocar al gobierno constituido, pero que esperaba que (Salvador) Allende gobernara con las FFAA, única salida viable frente a la aguda crisis nacional». Carlos Prats, «Memorias», Ed. citada, p.464.
- ⁸⁶ «El Mercurio», 9 de agosto de 1973, p.8.
- ⁸⁷ «El Mercurio», 20 de agosto de 1973, p.20.
- ⁸⁸ «El Mercurio», 8 de agosto de 1973.
- ⁸⁹ «El Mercurio», 9 de agosto de 1973.
- ⁹⁰ «El Mercurio», 14 de agosto de 1973.
- ⁹¹ «El Mercurio», 14 de julio de 1973.
- ⁹² «El Mercurio», 16 de agosto de 1973.
- ⁹³ «El Mercurio», 17 de agosto de 1973.
- ⁹⁴ «El Mercurio», 19 de agosto de 1973.
- ⁹⁵ «El Mercurio», 20 de agosto de 1973.
- ⁹⁶ «El Mercurio», 22 de agosto de 1973.
- ⁹⁷ «El Siglo», 14 de agosto de 1973, p.7.
- ⁹⁸ Entrevista a R. Thieme en *Ercilla* N° 3.134, abril del 2000, p.33-34.
- ⁹⁹ «La Nación», 10 de septiembre de 1973.
- ¹⁰⁰ «El Mercurio», 24 de agosto de 1973.
- ¹⁰¹ «El Siglo», 27 de agosto, p.3.
- ¹⁰² «El Siglo», 1 de septiembre de 1973.
- ¹⁰³ «El Mercurio», 1 de septiembre de 1973.
- ¹⁰⁴ Al respecto, véase la obra de Alberto Aggio, «*Democracia e Socialismo: A experiencia chilena*», Ed. Unesp, Sao Paulo, 1993.
- ¹⁰⁵ El relato que sobre esta cuestión hace el general Augusto Pinochet en su libro «*El Día Decisivo*», es muy precisa. Refiriéndose a la situación planteada en agosto de 1973, dice: «en esos días de creciente angustia, aunque comprendía que había llegado la hora de la acción, un hecho me detenía, ya que si bien el ejército estaba bajo mi mando, la orden de ejecución podía ser desobedecida, pues Allende había dejado al Comandante en Jefe como Ministro de Defensa y las dos unidades más fuertes de Santiago seguían en manos de Jefes que él consideraba de su total confianza...Sin la presencia de esos tres Generales todo se solucionaba;...El Comandante en Jefe del Ejército era el mayor obstáculo que se debía en-

frentar, pues era totalmente adicto a Allende. Había que considerar que la estructura de mando que posee la Institución, con un respeto total a las jerarquías, hacía muy difícil que el Comandante en Jefe no fuera obedecido por muchas de las unidades de Santiago y de provincias. Si se llegaba a quebrar la disciplina de la Institución, se iba a producir, sin lugar a dudas, una lucha entre nosotros mismos. Por tal razón era imperativo solucionar a toda costa este escollo». *«El Día Decisivo»*, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1980, p.107 y 108.

¹⁰⁶ Esta cuestión, en todo caso, también estaba clara muy tempranamente para quienes, al interior de las FFAA, pensaban en una solución del conflicto vía intervención militar. El General Augusto Pinochet, en su libro *«El Día Decisivo»*, describiendo la situación de comienzos de 1972, relata al respecto lo siguiente: «solía conversar con varios de estos oficiales; pero a uno de ellos, a quien apreciaba mucho y lo consideraba un soldado leal y franco, le expuse que para que el Ejército pudiera actuar, era imprescindible que la ciudadanía lo exigiera como la única salvación posible del caos a que se empujaba al país». Op. Cit. p.72.

¹⁰⁷ Carlos Prats, Op. Cit.,p.433.

¹⁰⁸ Carlos Prats, Op. Cit.,p.433.

¹⁰⁹ Carlos Prats, Op. Cit.,p.427.

¹¹⁰ Citada por Carlos Prats, Op. Cit.,p.467.

¹¹¹ Véase *«El Mercurio»*, 14 de agosto de 1973, p.8.

¹¹² Véase *«El Mercurio»*, 12 de agosto de 1973, p.33.

¹¹³ Carlos Prats, Op. Cit.,p.426.

¹¹⁴ Carlos Prats, Op. Cit.,p.434.

¹¹⁵ Carlos Prats, Op. Cit., p.462.

¹¹⁶ Carlos Prats, Op. Cit.,p.465 y 466.

¹¹⁷ Carlos Prats, Op. Cit., p.428.

¹¹⁸ Respecto a esta manifestación, Prats en sus Memorias relata que «después del mediodía, a raíz de que se difundió el falso rumor de que Montero había renunciado, (las mujeres) gritaban: «¡Viva Ruiz y Montero. Abajo Prats!». Op. Cit.,p.475

¹¹⁹ Carlos Prats, Op. Cit., p.477.

¹²⁰ Véase el texto íntegro de la carta en Carlos Prats, Op. Cit., p.477.

¹²¹ En relación a la participación de uniformados en la manifestación, Prats en sus Memorias refiere lo siguiente. «Entre los manifestantes aparecen un mayor y un capitán de Ejército en uniforme, y una persona de civil que se da a conocer como oficial de Ejército que pretendía impartir órdenes a carabineros. El capitán de uniforme -que resultó ser Renán Ballas Fuentealba, yerno del General(R) Alfredo Canales- se ubica frente a la puerta principal, pide silencio y textualmente manifiesta: «El general Prats no representa al Ejército de Chile y es un traidor». La incitación enardece de nuevo a los manifestantes, que lanzan piedras sobre los vidrios de la residencia y pretenden ingresar al antejardín, lo que obliga a carabineros a repelerlos».Op. Cit.,p.478.

¹²² Carlos Prats, Op. Cit.,p.484.

¹²³ Sobre la preparación de la intervención militar, véase el pormenorizado relato del General Augusto Pinochet en «*El Día Decisivo*», Ed. Andrés Bello, Santiago, 1980, sobre todo desde la página 71 en adelante.

¹²⁴ Sergio Bitar, Op. Cit., p.344-345.

¹²⁵ Luego del golpe de Estado, el General Prats, ante las amenazas que pendían sobre su vida, debió salir de Chile. En 1974, junto a su esposa, fue asesinado en Buenos Aires. La Comisión de «Verdad y Reconciliación», que recabó los antecedentes del caso, sostiene que el crimen fue el producto de un «acto terrorista de responsabilidad del Estado de Chile, que se presume fundadamente pertenecían a la DINA.» «*Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*». Texto Oficial Completo, «La Nación, 2», p. 135.

¹²⁶ Véase «*El Mercurio*», 23 de agosto de 1973, p. 1 y 10.

¹²⁷ En una carta dirigida a los militantes de su partido, fechada el 17 de enero de 1975, Bernardo Leighton, refiriéndose al mencionado acuerdo de la Cámara de Diputado, sostuvo que «en esa ocasión» la DC cometió «un grave error» al hacer también destinatarios de él «a los ministros uniformados del gabinete». Este error -explica Leighton- sirvió de pretexto a la dictadura para presentarlo más tarde como un llamado de la Cámara a las Fuerzas Armadas con el objeto de que dieran un golpe militar». (Revista Chile América, N°4, 1975). Bernardo Leighton, implícitamente, reconoció así que el mencionado acuerdo de la Cámara de Diputados, propuesto principalmente por parlamentarios del PDC, sirvió finalmente a los efectos de abrir paso a la salida rupturista de la derecha.

¹²⁸ «*El Mercurio*», 17 de agosto de 1973, p.1.

¹²⁹ «*El Mercurio*», 17 de agosto de 1973, p.1.

¹³⁰ «*El Mercurio*», 17 de agosto de 1973, p.1.

¹³¹ «*El Mercurio*», 20 de agosto de 1973.

¹³² «*El Mercurio*», 21 de agosto de 1973, p. 22.

¹³³ «*El Mercurio*», 30 de agosto, p.7.

¹³⁴ «*El Mercurio*», 2 de septiembre de 1973, p.35.

¹³⁵ «*El Mercurio*», 2 de septiembre de 1973, p.35.

¹³⁶ «*El Mercurio*», 4 de septiembre de 1973, p.20

¹³⁷ Véase «*El Mercurio*», 6 de septiembre de 1973, p.17 y 22.

¹³⁸ «*La Prensa*», 6 de septiembre de 1973, p.5.

¹³⁹ «*El Mercurio*», 6 de septiembre de 1973, p.19.

¹⁴⁰ «*El Mercurio*», 7 de septiembre de 1973, p.10.

¹⁴¹ «*El Mercurio*», 8 de septiembre de 1973.

¹⁴² «*El Mercurio*», 9 de septiembre de 1973, p.10.

¹⁴³ «*El Mercurio*», 9 de septiembre de 1973, p.33.

¹⁴⁴ «*El Mercurio*», 9 de septiembre de 1973, p. 50.

¹⁴⁵ «*El Mercurio*», 9 de septiembre de 1973, p.39.

¹⁴⁶ «El Mercurio», 9 de septiembre de 1973, p.40.

¹⁴⁷ «El Mercurio», 10 de septiembre de 1973, p.25.

¹⁴⁸ Ercilla N° 1.134, 3 de abril de 2000, p.33 y 34.

¹⁴⁹ Con el propósito de abrir puentes hacia la oposición democratacristiana, dirigentes de la UP, por encargo de Salvador Allende, se entrevistaron con el Cardenal Silva Enriquez, solicitándole hiciera de mediador en la búsqueda de una solución al problema de los transportistas así como también en el conflicto político global que estaba planteado. «El Mercurio», 19 de agosto de 1973.

¹⁵⁰ Fue en función de esto mismo que Salvador Allende terminó aceptando la renuncia de Carlos Prats a la Comandancia en Jefe del Ejército. El Primer Mandatario, persuadido por el propio Prats, llegó a la convicción de que un nuevo Comandante en Jefe, con menos anticuerpos en la institución, podría mantener mejor la adhesión del Ejército a la autoridad constituida. Con ese propósito Allende nombró en el cargo al general Augusto Pinochet, supuesto que compartía las convicciones constitucionalistas de su predecesor. Joan Garcés relata que Pinochet aceptó el cargo «con reconocimiento y con el compromiso de pasar a retiro a los seis generales que aparecían encabezando el asedio contra Prats y el gobierno...» Joan Garcés, Op. Cit., p.328.

¹⁵¹ «El Siglo», 30 de agosto de 1973, p.5.

¹⁵² «El Siglo», 30 de agosto de 1973, p.5.

¹⁵³ «El Mercurio», 5 de septiembre de 1973, p.18.

¹⁵⁴ «El Siglo», 30 de agosto de 1973, p.3.

¹⁵⁵ «La Nación», 24 de agosto de 1973, p.12.

¹⁵⁶ «La Nación», 10 de septiembre de 1973.

¹⁵⁷ «La Nación», 10 de septiembre de 1973.

¹⁵⁸ Orlando Millas, «Memorias», Tomo IV, fragmento publicado por el diario «La Epoca», 11 de septiembre de 1994, Suplemento, p.10. Estas memorias fueron luego publicadas por CESOC, «Memorias, 1957-1991. Una Digresión», CESOC, Santiago, 1996.

¹⁵⁹ Según relata Orlando Millas en sus memorias, en virtud de sus relaciones de parentesco, a él le fue encomendado por Salvador Allende la misión de conversar con Juan Gomez Millas con el fin de llevar a cabo las negociaciones. Orlando Millas hace el siguiente relato. «El (Juan Gomez Millas) era verdaderamente devoto de Frei, admirador suyo incondicional. Tuvimos cuatro sucesivos encuentros similares al inicial, sin que nunca tomara el nombre del ex-Presidente de la República, aunque siempre planteando con claridad los asuntos de manera que era indudable que lo interpretaba al pie de la letra.

«La proposición formulada por Juan -continúa el relato- consistía en asentir a que la fórmula de acuerdo se basase en una reforma constitucional prestigiada por ser sometida lo más rápidamente posible a plebiscito, pero que debía contener no sólo los asuntos contenciosos inmediatos sino también una gran iniciativa, consistente en la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que funcionaría paralelamente al Parlamento, elegida en comicios sin demora en forma similar a las elecciones de diputados, y con el plazo de un año para cumplir su cometido. Si el mensaje al país de Allende contenía ese planteamiento, un conjunto de personalidades de alto nivel del ámbito universitario, encabezado por Juan, publicarían en el mismo día un documento señalando que se había dado solución a la crisis política y

llamando a seguir el camino anunciado, a la vez que pronunciándose contra el recurso de la fuerza. Juan me aseguraba -relata Orlando Millas- que Frei estaría dispuesto a contestar de inmediato cualquier consulta de periodistas diciendo que concordaba con el documento anterior y lo hacía suyo." Orlando Millas, "Memorias", "La Epoca", 11 de septiembre de 1994, Suplemento, p.10.

¹⁶⁰ Véase Orlando Millas, «Memorias», fragmento publicado por «La Epoca», 11 de septiembre de 1994, Suplemento, p.10.

¹⁶¹ Orlando Millas, «Memorias» citadas, «La Epoca», 11 de septiembre de 1973, Suplemento, p.11.

¹⁶² «El Mercurio» del 9 de septiembre, refiriéndose a esta reunión sostuvo que ella terminó «sin pronunciamiento y los asistentes en su mayoría se retiraron alterados». El diario «La Prensa», bajo el título «Desesperada Búsqueda de una Salida», señaló: «una desorientación total, próxima al caos, evidenció ayer el conjunto de partidos que integran la llamada «Unidad Popular» al no llegar a ningún acuerdo respecto de los temas básicos: el plebiscito y la reapertura del diálogo con la Democracia Cristiana o, simplemente la renuncia. »La Prensa», 9 de septiembre de 1973.

¹⁶³ Orlando Millas, Op. Cit., Suplemento de «La Epoca» citado, p.12.

¹⁶⁴ Orlando Millas en sus Memorias relata en los siguientes términos este episodio: «al volver del teléfono Allende se sentó y permaneció unos minutos con las manos cubriéndole el rostro. Al recuperarse nos dijo: disculpen. Estoy en confianza con ustedes y en este momento me venció el cansancio. Frida (se refiere a la periodista Frida Modak) me ha referido el discurso que está pronunciando Carlos Altamirano y que abre paso al golpe de Estado. Puede venir lo peor». Suplemento de «La Epoca» citado, p.12.

¹⁶⁵ Orlando Millas, memorias citadas, en Suplemento de «La Epoca» citado, p.12.

¹⁶⁶ Augusto Pinochet, «El Día Decisivo», Ed. Andrés Bello, Santiago, 1980.,p.120.

¹⁶⁷ Véase Joan Garcés, Op. Cit., p.352 y siguientes.

¹⁶⁸ Según relata Osvaldo Puccio, secretario del Presidente, a través del General Badiola el General Pinochet envió telefónicamente su ultimatum final al mandatario: «rendición incondicional -señaló Badiola- (y) que el presidente fuera a hablar con Pinochet al Ministerio de Defensa». En respuesta, relata Puccio, -receptor del mensaje- «el presidente me encargó de transmitir lo siguiente: «Un Presidente de Chile no se rinde. Y recibe en La Moneda. Si Pinochet quiere que vaya al Ministerio de Defensa, que no sea maricón y que venga a buscarme personalmente». Osvaldo Puccio, «Un Cuarto de Siglo con Allende. Recuerdos de su Secretario Privado». Ed. Emisión, Santiago, 1985, p.288.

¹⁶⁹ «El Mercurio», 13 de septiembre de 1973, p.4.

¹⁷⁰ Tales parlamentarios y personeros fueron los siguientes: Bernardo Leighton, Ignacio Palma, Renán Fuentealba, Radomiro Tomic, Fernando Sanhueza, Sergio Saavedra, Claudio Huepe, Andrés Aylwin, Mariano Ruiz-Esquide, Jorge Cash, Jorge Donoso, Belisario Velasco, Ignacio Balbottín, Florencio Ceballos, Waldemar Carrasco y Mariano Penna.

¹⁷¹ «El Mercurio», 13 de septiembre de 1973, p.1.

¹⁷² Carlos Prats, Op. Cit., p.



Quizás esta sea la primera obra que, con suficiente perspectiva histórica, trata sistemáticamente sobre el contexto político que desembocara en el golpe del 11 de septiembre de 1973. Constituye un sólido intento orientado a explicar cómo un país que tenía el sistema institucional más firme y la democracia más desarrollada de Latinoamérica, junto a una cultura tolerante y pluralista, vio desplomarse tan estrepitosamente su régimen político, dando paso a terribles y traumáticas violencias que no se creía posible en estas latitudes.

El autor, con ese propósito lleva a cabo una investigación cuidadosa y detallada, centrada en el comportamiento de los partidos políticos durante los tres años de gobierno del presidente Allende, poniendo de manifiesto sus estrategias, prácticas y racionalizaciones, proponiendo a la par una explicación coherente y avalada en los hechos sobre los factores del derrumbe institucional que entonces adviniera.

Sin dudas que el presente texto hace una contribución sustantiva al esclarecimiento de un tema que es tan relevante en la historia contemporánea de Chile.